

Sentencia T-438/21

Referencia: Expediente T-6.745.652

Demandante: José de Los Santos Sauna Límaco

Demandados: jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de D  
Cultura

Magistrado Sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional[1], en ejercicio de sus competencias constitucio  
siguiente:

## SENTENCIA

En el proceso de revisión de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mi  
trámite de la solicitud de amparo de la referencia.

### I. ANTECEDENTES

#### Solicitud

José de Los Santos Sauna Límaco actuando en nombre y representación del resguardo Indígena Kogui  
cabildo gobernador presentó solicitud de tutela como mecanismo transitorio en contra de la jefe de la C  
Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla (La Guajira) y el Ministerio de Cultura, por considerar  
fundamentales a la integridad étnica, cultural y social, a la subsistencia, a la salud tradicional, al territo

#### Hechos

En la tutela presentada por José de Los Santos Sauna Límaco el 18 de diciembre de 2017 se cuestiona,  
jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla con oca  
por perturbación a la posesión promovido por Elis Cecilia Brito Caldera en representación de Carmela  
María Brito Solano y Mirta Felicia Caldera Contreras contra el Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhua  
otro, la presunta omisión del Ministerio de Cultura, en el trámite del mismo, al encontrarse en la contro  
La María y El Chocho donde se encuentra el sitio sagrado Jaba Tañiwashkaka declarado como bien de

Con el fin de dar claridad a los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo, estos se presentarán

#### 2.1. Hechos anteriores a la querella policiva

**2.1.1.** El Ministerio de Cultura profirió la Resolución No. 2873 del 13 de noviembre de 2012 “Por la c  
del ámbito nacional el sitio sagrado Jaba Tañiwashkaka, predios La Lola, El Prado, La María y El Cho  
municipio de Dibulla, La Guajira”[3].

**2.1.2** El 23 de noviembre de 2012 se celebró el Convenio de Asociación No. 2279 entre el Ministerio c

Arhuaco, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder y la fundación Amazon Conservation T técnicos, administrativos y financieros para la protección del bien de interés cultural del ámbito nacion ubicado en los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho localizado en el sector La Puntica, mu conformidad con los linderos contenidos en cada una de las escrituras públicas de los predios, las cuales convenio”[4].

2.1.3. El Resguardo Indígena Kogui Malayo Arhuaco mediante acto de compraventa consignado en la diciembre de 2012 de la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta[5] adquirió los mencionados pred

NOMBRE DEL PREDIO	CÓDIGO CATASTRAL	FOLIO
La Lola	Nº. 44600000200010177000	N
El Prado	Nº. 44600000200010177000	N
La María	Nº. 44600000200010175000	N
El Chocho	Nº. 44600000200010177000	N

**2.1.4.** Según el demandante, Jaba Tañiwashkaka, es el espacio comprendido por la desembocadura del costeras contiguas. Relata en la demanda de tutela que anteriormente los mamos mayores llegaban a es Expone que el lugar "[e]stá conectado con la laguna de Taxdziaka donde nace el río Jerez en la parte al sitio que es un horcón que sostiene a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el lugar de pago, de m que se utilizan para el poporo. Aquí se encuentran además materiales que se usan en la parte alta como pagos para pedir permiso y poder recoger los materiales. Jaba Tañiwashkaka es la madre de toda río Taxdziaka y washkaka- que es desembocadura".

2.2. Decisiones proferidas en el proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión hasta la pre

2.2.1. Resolución No. 019 del 01 de agosto de 2017[6], proferida por la jefe de la Oficina de Seguridad Alcaldía Municipal de Dibulla en la que resolvió: (i) conceder el amparo policivo sobre los predios El amparar la posesión en lo concerniente al predio denominado La Lola y (iii) dejar en libertad a las part ordinaria para dirimir las controversias que se salen del ámbito de competencia de este despacho.

Contra esta decisión, presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación, la representante de Manuel Brito Solano[9] y el Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Kogui Malayo Arhuaco (Go

**2.2.2.** Resolución No. 029 del 14 de noviembre de 2017[11], proferida por la jefe de la Oficina de Seg Alcaldía Municipal de Dibulla en la que resolvió: (i) no revocar la Resolución No. 019 de 2017 y (ii) n mencionada decisión que para todos los efectos quedará así: “ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER e 'LA LOLA', 'EL PRADO' Y 'LA MARIA', por las razones expuestas en esta providencia. ARTÍCULO posesión en lo concerniente al predio denominado 'EL CHOCHO', identificado como aparece en los tít descritos en esta resolución”.

2.3. Decisiones proferidas en el proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión después de

**2.3.1.** Resolución No. 176 del 24 de julio de 2018[13], proferida por el alcalde municipal de Dibulla en recurso de apelación interpuesto por las partes; (ii) confirmar en todas sus partes la Resolución 019 del por extemporáneo el recurso interpuesto por el Cabildo Gobernador Kogui Malayo Arhuaco.

**2.3.2.** Resolución No. 223 del 17 de septiembre de 2018[14], dictada por el alcalde municipal de Dibu, artículo segundo de la Resolución No. 176 de 2018, que para todos sus efectos legales quedará así: “A los artículos 1 y 2 de la Resolución 019 del 2017 que para todos sus efectos legales quedarán así: ART. amparo policivo sobre los predios 'LA LOLA', 'EL PRADO' Y 'LA MARÍA', por las razones expuestas providencia. ARTÍCULO SEGUNDO: No amparar la posesión en lo concerniente al predio denominado aparece en los títulos primitivos por los detalles descritos en esta resolución”.

#### Argumentos y pretensiones de la demanda de tutela

3.1. Para el demandante, la jefe de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibu de agosto de 2017, incurrió en una irregularidad en el proceso policivo de amparo por perturbación a la Brito Caldera en representación de Carmela Segunda Brito de Restrepo, Adalgisa María Brito Solano y contra el Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhuaco (Gonawindua Tayrona) al pronunciarse de fondo sobre los predios objeto de la querella desconociendo que en dicho procedimiento solo se puede intervenir para la posesión o mera tenencia y que en los procesos de policía no se controvierte el derecho de dominio ni las pruebas que hagan referencia a este tipo de disputa. Lo anterior, en criterio de la Sala puede enmarcarse de acuerdo con el entendimiento que la jurisprudencia constitucional le ha dado a este yerro y que se pre-

En el caso específico, advierte que la mencionada funcionaria realizó un estudio superficial de los títulos duplicidad en los folios de matrícula No. 210-5775 y 210-51554 del predio denominado El Prado, sin tener en cuenta que los títulos que atañen a este inmueble relacionadas en el último folio enunciado obedecen a una cadena lógica de tradición y validez.

Según el demandante la duplicidad de los certificados de matrícula inmobiliaria del mencionado predio registral por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos de Riohacha al momento de efectuar la protocolo 201593 del 20 de abril de 1971, mediante la cual el Incora le adjudicó el inmueble a la señora Carmela

Recalca que la señora Brito de Restrepo no puede alegar una perturbación a la posesión sobre un inmueble mediante escritura pública No. 687 del 4 de septiembre de 1972 de la Notaría de Riohacha, debidamente

Sostiene que dicho error registral no puede originar que se cuestionen o desconozcan los títulos de propiedad de los titulares del derecho de dominio, en su momento, pues en este caso además de las afectaciones a los derechos del derecho fundamental a la propiedad del resguardo indígena Kogui Malayo Arhuaco, quien además de su inmueble a su favor, cuenta con el acta de entrega del mismo con fecha del 24 de febrero de 2013, lo que evidencia la propiedad y, por el contrario, evidencia una actuación temeraria de la mencionada señora al presentar la demanda de tutela.

También, informa que en el proceso policivo aludido no intervino el Ministerio de Cultura, omisión que afecta el derecho del pueblo indígena sobre ese territorio ancestral.

Finalmente, destaca que se debe anteponer que la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios es un derecho internacional, vinculación que resulta primordial para el goce de otros derechos.

Agrega que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han insistido en la preservación de la conexión particular entre las comunidades indígenas y sus tierras y recursos naturales, misma, razón por la cual requiere de medidas especiales de protección y han insistido en que los Estados deben garantizar que tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica.

3.2. A juicio del accionante el reconocimiento de bien de interés cultural del ámbito nacional del sitio de los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho localizado en el sector La Puntica, municipio de Riohacha, en contra de las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural arrojadas por la intervención, según lo dispuesto en el artículo 7 de la citada normatividad, deberá contarse con la autorización de la Autoridad de Cultura, quien tiene funciones policivas.

Expone que el artículo 10 de la mencionada ley consagra las faltas que constituyen conductas punibles que pueden incurrir las personas que vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural.

3.3. El accionante solicita que se amparen los derechos fundamentales a la integridad étnica, cultural y tradicional, al territorio y a la consulta previa y, en consecuencia se ordene: (i) a la jefe de la Oficina de Segurid y Convivencia de Dibulla suspender las actuaciones que afecten los derechos del resguardo y (ii) al alcalde municipal de Riohacha que traslade al certificado de matrícula inmobiliaria inicial No. 210-5775 la cadena de transacciones 51554 y proceda a la cancelación de esta última. Igualmente pide se vincule al Ministerio de Cultura y actuaciones referidas.

#### 4. Trámite procesal y contestación a la demanda de tutela

La tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, de diciembre de 2017: (i) admitirla, (ii) correr traslado a la jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia de Dibulla y al Ministerio de Cultura, (iii) vincular a la Oficina de Instrumentos Públicos de Riohacha, legible y completa de los folios de matrícula inmobiliaria No. 210-5775 y 210-51554 del 24 de junio de 2017 respectivamente y (iv) vincular a las señoras Carmela Segunda Brito de Restrepo, Adalgisa María Brito Contreras por tener interés directo en las resultas del proceso.

Así mismo, resolvió oficiar: (i) al alcalde municipal de Dibulla y a la jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia del municipio, a efectos de que allegaran copia íntegra y completa de la actuación administrativa de la que participa Brito Caldera en representación de las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras con Arhuaco (Gonawindua Tayrona) y (ii) a la Oficina de Instrumentos Públicos de Santa Marta para que remita la matrícula inmobiliaria de los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho.

Vencido el término de traslado, se recibió respuesta por parte de la accionada e intervención de los vinculados.

4.1. La jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla, contestó la demanda bajo las pretensiones bajo los siguientes argumentos:

-Los certificados de tradición y libertad aludidos fueron revisados, estudiados y analizados por parte de la Autoridad de Cultura, observándose una serie de irregularidades frente a las leyes y reglamentos que regulan los aspectos de tradición y libertad.

-En el expediente reposan copias de la Resolución No. 2873 del 13 de noviembre de 2012 proferida por la Autoridad de Cultura, el Convenio de Asociación No. 2279 del 23 de noviembre de 2012 y de la Escritura Pública de Compra y Venta No. 2012 de la Notaría Primera del Circuito de Santa Marta. Concluyéndose que, primero se realizó la declaración de interés cultural, luego, se hizo el convenio y, finalmente, la venta de los predios.

-Se desconocen las características geográficas del espacio territorial y las referencias de carácter espiritual de los predios.

-En virtud de las facultades conferidas en la Constitución y el artículo 76 de la Ley 1801 de 2016 y con legalidad, imparcialidad, moralidad y los demás que informan el ejercicio de la función pública, se amparó atendiendo las condiciones especiales de la comunidad Kogui minoritariamente asentada en el predio I

-En el expediente de la querella policiva consta que Carmela Segunda Brito de Restrepo y el gestor local Arhuaco, Jesús María Tapias, habían suscrito un acta de compromiso en la que se consignó que acudir

-De los hechos descritos en la demanda de tutela y que datan del año 2015 no se tiene conocimiento. Desde diciembre de 2016, que se relacionan con un nuevo hecho perturbatorio, los cuales fueron denunciados por la familia Brito.

-Durante todo el trámite de la querella policiva, se respetó el debido proceso y se garantizó el acceso a la justicia. Así, con fundamento en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1801 de 2016, dentro del límite de la documentación aportada en el proceso que acredita que la familia Brito está en posesión de tres de los predios de la comunidad Kogui Malayo Arhuaco en uno, se profirieron las siguientes decisiones:

Mediante Auto 023 del 17 de enero de 2017 se admitió la querella policiva por perturbación a la posesión

Con fundamento en la probada ocupación y posesión real y efectiva de los predios por las partes involucradas. Por Resolución No. 019 del 1 de agosto de 2017, se amparó la posesión de la siguiente manera: (i) de la comunidad Kogui Malayo Arhuaco en el predio La Lola al considerar que en este lugar tenía su asentamiento y (ii) de la familia Brito sobre los predios La María.

Al presentarse contra la anterior decisión el recurso de reposición y en subsidio de apelación, mediante Auto del 16 de noviembre de 2017, se modificaron los artículos primero y segundo de la resolución recurrida, quedando asentado que el asentamiento de la referida comunidad, es el Predio El Chocho y no La Lola.

Destaca que respetó los derechos de la referida comunidad al amparar su posesión del predio El Chocho y de la familia Brito quienes son poseedores de los predios La Lola, El Prado y La María.

4.2. El registrador principal (E), Francisco Javier Ochoa Cadavid de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, remitió al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha los certificados de libertad de gravámenes inmobiliarios 210-001161, 210-0051563 y 210-0051554 y respecto de la demanda de tutela señaló:

-Sí son ciertos los hechos relacionados con el acto de compraventa de los predios La Lola, El Prado, La María y con la declaratoria de bien de interés cultural nacional de los mismos, según aparecen en los respectivos folios No. 210-001161, 210-0051560, 210-0051563 correspondientes a los predios.

-Manifiesta que revisada la base de datos y los antecedentes de los folios inmobiliarios No. 210-005777, 210-005778, 210-005779 que se trata del mismo inmueble, con la misma denominación, a saber: El Prado.

FOLIO INMOBILIARIO NO. 210-005775	FOLIO INMOBILIARIO NO. 210-005
Se abrió con base en el oficio de junio 24 de 1982 correspondiente a la adjudicación del Incora a favor de Carmela Segunda Brito de Restrepo.	Se abrió con base en la solicitud de sistema de mayo 5 de 2009, con el as correspondiente a la escritura de cor septiembre 4 de 1972 de la Notaría ( Carmela Segunda Brito de Restrepo tr Raúl Hoyos Gómez, Jairo Bustama Bustamante Betancour, quienes a mediante escritura pública No. 6954 2010 de la Notaría Segunda de Rioh Pinzón, quien la traslada mediante escri de septiembre 15 de 2010 de la Manizales a Carlos Andrés Hoyos propiedad mediante escritura pública 7 de 2012 de la Notaría Primera del Cí resguardo Kogui Malayo Arhuaco, inmueble referenciado.

Sostiene que al parecer al momento de abrirse el folio 210-0051554 la persona que estaba realizando la solicitud de certificado de libertad dio datos de libros de antiguo sistema con el asiento registral de la c escritura pública No. 687 de septiembre 4 de 1972 de la Notaría de Riohacha y no manifestó que el inn inmobiliario.

Destaca que el usuario es quien suministra la información para la expedición del respectivo certificado

Advierte que la función registral se desarrolla teniendo como base los documentos que los interesados correspondientes folios de matrícula inmobiliaria, pues los registradores de instrumentos públicos no ti material del inmueble, ni ejercen el control de legalidad sobre la actuación de los procesos para la adju Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora.

Aclara que una vez determinada la identidad documental y registral de los inmuebles referenciados se j actuación administrativa tendiente a la unificación de conformidad con la reglamentación que sobre el de Notariado y Registro.

Frente a la solicitud de cancelación de la inscripción solicitada por el demandante advierte que no es p establecen los artículos 61 y 62 de la Ley 1759 de 2012 solo procede la cancelación de un registro por

4.3. El coordinador del Grupo de Defensa Judicial del Ministerio de Cultura señala que dentro de las al ministerio no se encuentra la de intervenir en asuntos en los cuales se debate sobre derechos reales (pro los inmuebles tengan la calidad de bien de interés cultural nacional, lo anterior porque esta declaratoria mencionados derechos.

Advierte que tampoco puede el ministerio ejercer competencias para resolver situaciones tales como al perturbaciones o cualquier otra reclamación sobre derechos reales porque ellas han sido asignadas a las policivas o administrativas en donde se encuentren los bienes.

Respecto de la petición del demandante de que se aclare la situación jurídica de los predios, el ministerio de derechos reales en cabeza de todos los ciudadanos colombianos especialmente la de aquellos grupos indígenas como ocurre en este caso. Para el efecto, es necesario que se requiera a la Oficina de Instrumentos Públicos que realice un cuidadoso estudio de la situación y adopte las medidas necesarias para que todos los que tienen el predio restituya lo que a cada uno corresponde.

4.4 Carmela Segunda Brito de Restrepo, Adalgisa María Brito Solano y Mirta Felicia Caldera Contreras solicitan negar las pretensiones bajo las siguientes consideraciones:

- Según la documentación recaudada al parecer en el año 2009 se iniciaron unos trámites legales que cubren los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho que fue perfeccionada en la Notaría Primera del Circuito Judicial de la ciudad de Bogotá No. 2906 del 7 de diciembre de 2012.

- Con posterioridad al negocio de compraventa esos predios formarían parte de la recuperación que el municipio de Arhuaco viene haciendo de territorios que según la comunidad indígena forman parte de la Línea Negra.

- Es necesario que el juez constitucional conozca los siguientes aspectos:

- En la ficha predial No. 0148 se registra la existencia de una vasta extensión de terreno que históricamente ha sido de propiedad de la Nación y que se denominó La Luisa de propiedad de la Nación.

El señor Lucas Brito González hace aproximadamente 110 años tomó posesión de esta vasta extensión de terreno.

- En el año 1971 los predios objeto de disputa fueron adjudicados por el Incora a: Lucas Manuel Brito Redondo, Carmela Segunda Brito Redondo y Lorenza Helena Redondo de Brito, mediante resoluciones de adjudicación de predios baldíos No. 201-592 del 20 de agosto de 1971 y 201-728 del 27 de agosto de 1971 y 201-723 del 20 de agosto de 1971. De ahí que, el cabildo gobernador del Resguardo Indígena de la zona puede alegar mejor derecho y tampoco puede hacer referencia al concepto de ancestralidad, sin que se pueda alegar la posesión privada[18].

- La carta catastral análoga grafica que, en relación a los títulos primitivos existen serias inconsistencias en un mismo predio “ELCHOCHO- EL PRADO” a pesar de que la ley exige que cada uno debe tener un documento, aunque no aparece físicamente, para efectos de la compraventa a “LA LOLA” se le asignó el mismo código catastral, lo que implica que los tres se identifican con el número predial 0175, lo que viola los preceptos legales en materia de catastro.

- El código catastral 0175 fue asignado al predio “LA MARÍA” que según la carta catastral análoga también fue asignado originariamente era el predio “LA LUISA-PANTANO 0148”, pero no en la ubicación que aparece en las resoluciones de adjudicación, los cuales contienen la colocación correcta desde el punto de vista geográfico.

- Existe una anotación manuscrita -presuntamente falsa- realizada en el documento de registro a máquina que indica que el predio La María[19].

- La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Riohacha, la Notaría Primera del Circuito Judicial de la ciudad de Bogotá administrativas involucradas en la compraventa de los predios objeto de disputa por ocupación, violaron el deber de avalar dicho negocio jurídico, toda vez que tenían que verificar las correspondientes informaciones sobre el terreno, pero no existe prueba de la venta que la familia Brito hizo a la familia Hoyos, quien vendió a su vez a la comunidad indígena.

- En la mencionada negociación no se aplicó rigurosamente la Resolución No. 070 del 4 de febrero de 2009.

situaciones:

No se presenta una interrelación en las bases de datos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAG-, por ello no existe una identificación física, jurídica y económica.

Respecto del aspecto jurídico, por ejemplo, en los documentos catastrales no se indicó ni anotó la relación (propietario o poseedor), y el objeto o bien inmueble, mediante la identificación ciudadana, es decir la número de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria del predio respectivo.

En los trámites adelantados, no se observa una calidad en la información catastral[22], ni se realizó la inspección del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAG- que requiere el levantamiento y la verificación de los elementos inmuebles, mediante la práctica de una inspección catastral.

No se le asignó a cada predio un código numérico que permitiera ubicarlo inequívocamente en los registros.

La Lola no cuenta con ficha predial que es el documento en medio análogo o digital, en el que se consigna cada predio de la unidad orgánica catastral y que una vez es diligenciado es la constancia de identificación.

-De la compraventa de los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho existe la escritura pública de la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta, pero, para que se perfeccionara este negocio fue necesario pasar por varios entes públicos de acuerdo con sus competencias, a saber: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ministerio de Cultura, el municipio de Dibulla, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira, la Alcaldía de Santa Marta y la Procuraduría General de la Nación, los cuales tienen gran responsabilidad frente a los hechos objeto de esta tutela.

No es justo que la familia Brito sea quien deba asumir los perjuicios de la negociación de estos predios cuando la ley es irrefutable[26].

-Frente a los títulos que amparan la venta de los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho, no consta que hayan sido otorgados hace más de 40 años. Durante el trámite de la querella, la familia Mendoza, en representación de los señores Carlos y María del Carmen Mendoza, presentó copias de dos documentos en los que se consignan una presunta venta de los predios El Chocho en el que no consta la resolución de adjudicación y de otro predio llamado “La Marina” que no consta en los registros.

-La declaración de bienes de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura, respecto de los predios El Chocho, mediante Resolución No. 2873 del 13 de noviembre de 2012, no es legal. Llama la atención que se declare de interés cultural al inmueble contiguo a La Lola que es de propiedad de la familia Lacerna.

-La conectividad espiritual que generalmente alegan las comunidades indígenas no puede considerarse como fundamento para la titularidad de predios. En el presente caso, con anterioridad a la compraventa de los cuatro predios por parte de la familia Brito, la Resolución No. 2106 del 8 de noviembre del citado año del Ministerio del Interior[27] que da cuenta de que estos terrenos habían sido adjudicados a la familia Brito.

Además, previamente, la Resolución No. 307 del 3 de mayo de 2012[28] del Ministerio del Interior le dio fe de que estas comunidades indígenas, tienen su lugar de asentamiento permanente, históricamente en el municipio de SANTA MARTA”.

-La relación espiritual entre la tierra y los indígenas que son propias de la cosmología Kogui no puede considerarse como fundamento para la adquisición de predios y dotación de terrenos, pues lo que existe es una relación legal y una conexión entre la adquisición de predios y dotación de terrenos.



indígenas que fueron adquiridos con recursos del Sistema General de Participaciones.

-En la querella policiva no se discutió la titularidad de los predios, sino su ocupación y posesión, la cual se resolvió por el Auto No. 019 del 1 de agosto de 2017 en la que se concedió a la familia Brito el amparo policivo sobre los predios Resguardo Indígena Kogui Malayo Arhuaco sobre El Chocho, una vez se verificó la ocupación y posesión por la querella.

-Respecto de la duplicidad del certificado de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio El Prado se consigna una anotación única respecto de la cancelación de un embargo, mediante oficio No. 901 de 2017 del Civil del Circuito de Riohacha (15 años después de la adjudicación de este bien). Esta glosa da cuenta de un resultado de un proceso civil que refleja que recaen sobre este predio todos los derechos que o el demandante Brito.

## 5. Decisión judicial que se revisa

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, mediante sentencia del 23 de enero de 2018, improcedente la tutela de la referencia, bajo las siguientes consideraciones:

- “El actor cuenta con varias acciones para detener tal eventualidad. De hecho y a manera de información se le informa que el recurso de nulidad que se erige como mecanismo alternativo dentro de la sede administrativa”.

-No se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

-Se encuentra pendiente por resolver el recurso de apelación.

Esta decisión no fue impugnada.

## 6. Trámite en sede de revisión

6.1. Una vez seleccionado el proceso de la referencia, la Sala de Revisión, mediante Auto del 11 de septiembre de 2018, para recaudar algunas pruebas para mejor proveer la decisión y, en consecuencia, le solicitó al alcalde municipal de Dibulla proveído por medio del cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 019 del 1 de agosto de 2017 de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla dentro la querella de la familia Brito Caldera en representación de Carmela Segunda Brito de Restrepo, Adalgisa María Brito Solano y contra el Cabildo Indígena Kogui Malayo, Arhuaco (Gonawindua Tayrona) y, adicionalmente, resolvió el presente proceso.

6.1.1. La Alcaldía Municipal de Dibulla, mediante el jefe de la Oficina Jurídica, remitió el 24 de septiembre de 2018 los siguientes actos administrativos:

-Resolución No. 019 del 1 de agosto de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA QUEJAS DE LA FAMILIA BRITO CALDERA EN REPRESENTACIÓN DE CARMELA SEGUNDA BRITO DE RESTREPO, ADALGISA MARÍA BRITO SOLANO Y CONTRA EL CABILDO INDÍGENA KOGUI MALAYO ARHUACO SOBRE EL CHOCHO, PROFERIDA POR LA JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DIBULLA”.

-Resolución No. 029 del 14 de noviembre de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE APELACIÓN Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 019 DEL 1 DE AGOSTO DE 2017 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE DIBULLA” por la mencionada funcionaria.

-Resolución No. 176 del 24 de julio de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO CONFIRMA RESOLUCIÓN”, proferida por el alcalde municipal de Dibulla.

-Resolución No. 223 del 17 de septiembre de 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ACORDADA CONVENCIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA Y LA COMUNITAT INDÍGENA DE LA GUAYANA FRANCESA, PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA GUAYANA FRANCESA”, dictada por la dicho ente territorial.

**6.1.2.** El accionante en escrito del 1 de octubre de 2018, señala que la Resolución No. 176 del 24 de julio de 2018, en el que se configura el defecto falta de motivación, toda vez que consigna afirmaciones generales tales como “las pruebas sin mencionarlas; no valorar derecho alguno y que el cabildo había interpuesto una tutela”, las cuales, a su juicio, una decisión injusta, ilegal y arbitraria, en la que se silenció la posición de la comunidad indígena, terminó reconociendo derechos inexistentes y negando el derecho al territorio indígena.

Para el demandante el reconocimiento a los derechos de propiedad y posesión inexistentes, se acreditar respaldo jurídico.

Destaca que analizado el origen del conflicto que propició la presente acción constitucional, se encuentran Restrepo y su apoderada, a través de una querrela policiva confusa, buscan que se ampare el derecho de a la vez, reconstruir una casa.

La representante de la familia Brito para acreditar la propiedad sobre dicho inmueble allegó el certificado 5775, abierto a su solicitud en el año 1982. Según lo acreditado en el expediente para la citada anualidad que significa que obtuvo ese documento de manera ilegal.

Advierte en relación con el número de certificado de matrícula inmobiliaria del predio El prado que de le correspondió el No. 210-51554 en el que aparece la historia del mencionado inmueble, así: la adjudicó en 1972 y las sucesivas tradiciones hasta llegar a la compraventa por parte de los indígenas en 2012.

Respecto de la titularidad de la comunidad indígena sobre los predios La Lola, El Prado, La María y El matrícula inmobiliaria y los títulos que así lo demuestran y que no han sido anulados por decisión judicial fue desconocido su valor.

Lo anterior, afecta la seguridad jurídica, toda vez que, en la legislación colombiana, la propiedad inmu debidamente registrados (título y modo) y el registro de instrumentos públicos es el único medio eficaz los bienes y goza de presunción de legalidad.

Con todo, según la jurisprudencia constitucional “el territorio indígena está asociado a una noción de a estatal a través de títulos de dominio, ya que para los étnicos la tierra significa el espacio donde desarro

6.2. Posteriormente, la Sala de Revisión, mediante Auto del 28 de enero de 2019, consideró necesario : fin de verificar los supuestos de hecho que originaron la tutela, por lo que además resultó necesario ex hasta que culminara la etapa probatoria y fueran debidamente valoradas las pruebas allegadas. Así, se s Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla que informara en qué estado policivo proferido dentro de la querella instaurada por Elis Cecilia Brito Caldera en representación de l Restrepo, Adalgisa María Brito Solano y Mirta Caldera Contreras contra el Cabildo Indígena Kogui M y remitiera copia de toda la actuación surtida.

6.2.1. Mediante escrito del 5 de marzo de 2019, la Inspectora de Policía Urbana del municipio de Dibu

siguiente:

-La medida adoptada por la jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Policía Urbana fue la conceder tanto a la parte querellante como querellada la medida de amparo por

-Con posterioridad a la decisión mencionada, se presentó ante la inspección el recurso de reposición y la representante de las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras, Lucas Manuel Brito, Resguardo indígena Kogui Malayo Arhuaco (Gonawindua Tayrona), los dos primeros dentro del término extemporánea, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones No. 029 del 14 de noviembre de 2017.

-El 3 de agosto de 2018, el alcalde municipal de Dibulla dio a conocer la Resolución No. 176 del 24 de agosto de 2018, por la cual se interpuso recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 019 del 1 de agosto de 2017. En esa fecha, previa a la audiencia de conciliación, se realizó una mesa de trabajo que fue liderada por la personera municipal en la que asistieron la Seccional de La Guajira, Instituto Geográfico Agustín Codazzi -Territorial Guajira, Agencia Nacional de Promoción Cultural, Indígenas de la Gobernación de La Guajira, Policía Seccional DEGUA, Estación de Policía Municipal, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía, el secretario de gobierno municipal. A dicha actividad no asistieron miembros del Resguardo Indígena Kogui Malayo Arhuaco.

-En la fecha indicada se dio paso a la materialización de la medida por lo que se dispuso el traslado a la familia Brito y El Chocho que fueron amparados con el fin de salvaguardar los derechos constitucionales y legales de la familia Brito y cesar las perturbaciones a las que hubiese lugar. Se encontró de conformidad con las diligencias de investigación anterioridad, la situación de posesión del predio El Chocho en cabeza del Resguardo Indígena Kogui Malayo Arhuaco con construcciones en madera y cercamiento muy reciente.

Dicha situación fue respetada por la familia Brito, no pudiéndose predicar lo mismo de los miembros de la familia Brito, habiendo perdido la oportunidad procesal para manifestarse, se opusieron a través de vías de hecho. Ante la situación mencionada familia adelantar los trámites legales ante Planeación Municipal, Dirección General Marítima, Dirección Autónoma Regional de La Guajira para que determinen el sitio de construcción de las nuevas viviendas destruidas por los indígenas.

## II. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DECISIÓN

### 1. Competencia

La Corte Constitucional, a través de esta Sala de Revisión, es competente para revisar el fallo de tutela de la familia Brito, con fundamento en el inciso segundo del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución y los artículos 33 al 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

### 2. Funciones jurisdiccionales

2.1. Funciones jurisdiccionales asignadas a las autoridades administrativas. Reiteración de jurisprudencia.

**El inciso 3 del artículo 116 de la Constitución (modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, artículo 1º) establece que la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas, pero no será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos”.**

**Igualmente, el artículo 13 de la Ley 270 de 1996[30], modificado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009, establece que las autoridades administrativas ejercen función jurisdiccional “respecto de conflictos entre p**

**normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes”. Asimismo, aclaró que tales autoridades no podrán ejercer funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal.**

Por último, el parágrafo 3° del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012[32] consagra que “[l]as autoridades administrativas no podrán ejercer funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativo”.

De lo expuesto se concluye que conforme al artículo 116 Superior, el Legislador puede otorgar excepciones a las autoridades administrativas para que decidan controversias entre particulares como terceros imparciales, siempre que sea predicable de los jueces de la República y bajo la garantía del derecho fundamental al debido proceso[33].

**2.2. Las decisiones adoptadas en ejercicio de la función de policía tienen alcances jurisdiccionales. Precedente jurisprudencial**

El poder de policía corresponde al conjunto de normas de carácter general, impersonal y abstracto mediante las cuales se regulan los procesos policivos civiles que se orientan a crear condiciones sociales para asegurar el orden público, la moralidad, la salubridad, la tranquilidad y la seguridad[34].

La Constitución se refiere en varias de sus normas al poder de policía (entendido como potestad de reglamentación de policía (consistente en la gestión administrativa que concreta el mencionado poder), y la actividad de policía coactiva)[35].

Para lo que interesa a la presente causa, resulta necesario precisar que uno de los instrumentos utilizados para controlar los procesos policivos de amparo. Al respecto, la Corte en Sentencia T-601 de 2016 señaló que es procedente (i) las decisiones que se adoptan en dichos trámites tienen el alcance de actuaciones judiciales a pesar de que son administrativas[36], por ello, no son susceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y (ii) en la medida en que dicha decisión, como quedó expuesto, tiene naturaleza jurisdiccional, procedentes las acciones civiles para cuestionar los actos jurisdiccionales en razón de que estas tienen el carácter de violación de un derecho fundamental, cuando el proceso policivo se adelanta de manera irregular.

**Bajo este contexto, esta Corporación de manera reiterada ha señalado que como “alrededor de la tutela judicial idóneo para lograr la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades públicas, [queda] tan sólo la acción de tutela para garantizar el amparo de tales derechos.”**

Ahora bien, previamente la Sala debe precisar que (i) si bien la comunidad indígena accionante hace un reclamo que considera vulnerados como consecuencia del fallo proferido en un proceso policivo de amparo por presunta omisión del Ministerio de Cultura en este trámite, es posible concluir que el principal derecho que se busca proteger es el debido proceso, y (ii) en la medida en que dicha decisión, como quedó expuesto, tiene naturaleza jurisdiccional, la metodología definida por la jurisprudencia constitucional para resolver los casos de tutela en contra de las autoridades administrativas es aplicable.

Bajo el citado contexto, la Sala deberá resolver: (i) ¿la tutela interpuesta contra la decisión proferida por la Alcaldía Municipal de Ciudadana del municipio de Dibulla en el marco de un proceso policivo de amparo por perturbación a las garantías constitucionales de procedencia contra providencias judiciales?

Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa y en consideración a los antecedentes planteados, ¿cómo se debe resolver las siguientes cuestiones:

(ii) ¿La decisión proferida por la jefa de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Ciudadana del municipio de Dibulla en el marco de un proceso policivo de amparo por perturbación a las garantías constitucionales de procedencia contra providencias judiciales?

defecto fáctico?

Y, finalmente, (iii) ¿el Ministerio de Cultura incurrió en una omisión por el incumplimiento de sus funciones de interés cultural del ámbito nacional, al no intervenir, en un proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión, el mismo?

Para resolver la problemática planteada, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y específicos; (ii) el examen de procedencia general en el caso concreto de amparo por perturbación a la posesión; (v) concepto de bienes de interés cultural para, finalmente, determinar la procedencia del amparo constitucional.

### 3. De la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, toda persona puede reclamar, por sí misma o por intermedio de un abogado, ante el juez competente, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando éstos hubieren sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o por los particulares en los eventos que establezca la Constitución, siempre que exista otro instrumento de defensa judicial, excepto que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

**El mecanismo de protección procede, en consecuencia, contra cualquier autoridad pública que vulnere o amenace derechos constitucionales fundamentales, incluidas, por supuesto, las autoridades judiciales de la República, las cuales, sin excepción, “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus bienes, creencias y demás derechos y libertades”, como lo consagra el artículo 2º de la Constitución.**

Por otra parte, la Corte Constitucional con fundamento en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y 1 del Pacto Americano sobre Derechos Humanos[41], los cuales proveen sustento normativo adicional a la acción constitucional contra providencias judiciales cuando (i) no existan otros recursos de defensa judicial, (ii) el mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y (iii) aquellos no sean eficaces, por las partes, en el caso de amparo, del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Debido a la función constitucional asignada a quienes administran justicia y, en razón a su naturaleza, la tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional, pues en estos eventos, “la adecuación de los valores constitucionales implica un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la mencionada acción constitucional y el principio Democrático de Derecho-, y la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio de cosa juzgada, entre otros.”

Bajo este contexto, la Corte ha señalado que la tutela contra sentencias judiciales “es un instrumento excepcional que procede en aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que afectan los mandatos previstos en el Texto Superior. En este sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales no es un recurso de validez'[43], lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con recursos ordinarios como extraordinarios, para controvertir las decisiones que estimen arbitrarias o que sean ineficaces. No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en estos casos, procede la acción de amparo constitucional”.

En desarrollo de lo expuesto, esta Corporación, a partir de la Sentencia C-590 de 2005, señaló una serie de criterios. Los primeros, referidos a la procedencia de la tutela y, los segundos, relativos a la tipificación de las situaciones de vulneración de derechos fundamentales, especialmente, el derecho al debido proceso. Antes de abordarlos la Sala e

### 3.1. cuestión previa: legitimación en la causa

#### 3.1.1. Legitimación en la causa por activa

Respecto de las comunidades indígenas, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tienen la posición fundamental en forma colectiva y a través de sus dirigentes. En esta misma línea, este Tribunal ha establecido que también puede ser promovida en estos casos por organizaciones creadas para defender los derechos de los miembros del Pueblo[45].

Así, esta Corporación ha reconocido a las comunidades indígenas como sujetos colectivos autónomos e individualmente considerados para **ejercer** sus derechos fundamentales colectivos[46]. Este reconocimiento incluye a los miembros individuales que la conforman” con lo cual adquieren “una connotación cultural global y de la cultura hegemónica occidental de las mayorías, cultura de grupo que es transferida a los individuos de las comunidades”.

Lo anterior se deriva de los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto y protección, por lo cual estas colectividades adquieren el estatus político para ejercer, reclamar y beneficiarse de los derechos.

En suma, cuando se encuentran involucradas comunidades étnicas, la legitimación por activa se acredita de la siguiente manera: (i) de manera colectiva o (ii) de forma individual por parte de la Defensoría del Pueblo, las comunidades indígenas, y los dirigentes o miembros individuales de esas colectividades.

En esta oportunidad, la solicitud de tutela fue promovida por José de Los Santos Sauna Límaco quien es el cabildo gobernador del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco y de la organización Comunal del municipio de Dibulla, según acta de posesión del 27 de marzo de 2017 suscrita ante la Alcaldía del municipio de Dibulla, periodo comprendido del 11 de febrero de 2017 al 11 de febrero de 2021. Luego, la legitimación por activa es satisfactoria.

#### 3.1.2. Legitimación en la causa por pasiva

La acción constitucional se dirige en contra de la jefa de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Dibulla y el Ministerio de Cultura los cuales son demandables por esta vía.

Recuérdese que la tutela cuestiona el fallo proferido por la mencionada funcionaria en el marco de un procedimiento de posesión que presuntamente vulneró los derechos fundamentales del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, por lo que el ministerio se le indilga una supuesta omisión, que se vincula directamente con el cumplimiento de sus deberes de interés cultural del ámbito nacional.

### 3.2. De los requisitos generales

Este Tribunal ha reconocido los siguientes requisitos generales, los cuales habilitan al juez de tutela para declarar la inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad cuando configura alguna causal específica de procedibilidad:

Relevancia constitucional, es decir, que involucre la posible vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Subsidiariedad, en el sentido de que se hubieren agotado los recursos ordinarios y extraordinarios al al menos uno de los cuales se profirió la providencia, excepto que, atendiendo a las circunstancias en que se encuentre, no se evite la consumación de un perjuicio irremediable.

Inmediatez, esto es, que, considerando las circunstancias del demandante, se promueva en un término razonable la vulneración.

Cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia en la decisión que se considera

Que el solicitante identifique de forma razonable los yerros que generan la vulneración, y que estos hayan ocurrido en el proceso judicial, en cuanto ello hubiere sido posible.

Que no se dirija contra una sentencia de tutela, salvo que haya existido fraude en su adopción.

### 3.3. De los requisitos específicos

Una vez se constate el cumplimiento de los anteriores requisitos generales, le corresponde al juez de tutela judicial demandada vulnerar en forma grave el derecho al debido proceso del accionante, de tal forma que resulte incompatible con la Constitución por incurrir en alguno de los defectos que la jurisprudencia ha reconocido en materia de procedibilidad, o defectos materiales, entre los cuales se encuentran:

Defecto orgánico: se presenta cuando la providencia impugnada fue proferida por una autoridad judicial que no tenía facultades para adoptarla.

Defecto procedimental: se origina cuando la decisión judicial cuestionada se adoptó con desconocimiento de las reglas de procedibilidad, con un exceso ritual manifiesto.

Defecto fáctico: se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio para la aplicación del supuesto de hecho que fundamenta la decisión cuestionada, o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada.

Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o concretas; cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando el resultado o alcance que no tiene, entre otros supuestos.

Error inducido: sucede cuando la decisión que vulnera los derechos fundamentales del demandante es consecuencia de un error inducido por terceros.

Falta de motivación: implica el incumplimiento del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión.

Desconocimiento del precedente: se configura cuando el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial que se trate, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación.

Violación directa de la Constitución: se configura cuando la autoridad judicial le da a una disposición de la Carta Fundamental. Esta Corte ha indicado que se presenta violación directa de la Constitución cuando se aplica el artículo 4 "la Constitución es norma de normas", por lo que en caso de incompatibilidad entre ella y las disposiciones superiores", el juez adopta, entre otros supuestos, una decisión que la desconoce o altera el sentido y alcance constitucional que resulta aplicable al caso concreto, o desconoce valores, principios o reglas constitucionales que resultan aplicables al caso concreto. Se configura igualmente cuando se desconoce o altera el sentido y alcance de la disposición legal al caso concreto. Se configura igualmente cuando se desconoce o altera el sentido y alcance directamente por el constituyente.

Con todo, es importante resaltar que, dada la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales que vulneran la procedibilidad se aprecien de una manera palmaria y de tal magnitud que puedan desvirtuar la jurisprudencia que no toda irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una causal específica de procedibilidad.

#### 4. Del examen de los requisitos generales en la causa objeto de la controversia

La Sala considera que en este caso se satisfacen los requisitos de procedencia de la acción constitucional.

4.1. La cuestión que se discute es de relevancia constitucional, pues se trata de la posible afectación de proceso del resguardo indígena Kogui Malayo Arhuaco, sujeto de especial protección constitucional, d

4.2. Se han agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial. Como quedó expuesto, contra las d policivo de amparo por perturbación a la posesión, no procede recurso alguno ante la jurisdicción de lo

En el presente caso, el juez de instancia negó la protección solicitada, bajo el argumento según el cual había concluido el proceso policivo mencionado, fundamento que, en principio, respalda esta Corporac

A pesar de ello, al momento de ser analizada la tutela en sede de revisión, se advierte que dicho trámite instancia en la que se confirmó la orden de conceder el amparo policivo en tres de los cuatro predios ir circunstancia que modifica el supuesto de hecho utilizado por el juez de instancia y que impulsa a esta ordinarios de defensa se han agotado.

Con fundamento en lo expuesto, la Corte reitera que debe analizar el cambio de circunstancias al mom derecho fundamental presuntamente amenazado o vulnerado, por cuanto la función del juez constitucio proferir una orden que efectivamente propenda por la protección y que se adecue a las circunstancias fi

4.3. Constata la Sala que el accionante expuso de manera clara las razones que fundamentan la supuest fundamentales del resguardo indígena Kogui Malayo Arhuaco y que se derivan de un defecto fáctico. I Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla en la Resolución No. 019 del irregularidad en el proceso policivo mencionado al pronunciarse de fondo sobre la titularidad del derec desconociendo que en dicho procedimiento solo se puede intervenir para evitar o detener la perturbació en los procesos de policía no se controvierte el derecho de dominio ni tampoco se deben considerar las tipo de disputa.

También destacó que la titularidad indígena sobre los predios involucrados en el proceso policivo se en de matrícula inmobiliaria y los títulos que no han sido anulados por decisión judicial, pero que, en la q valor.

Igualmente se evidencia que el argumento según el cual, a través del proceso policivo no se podía dirir propiedad de los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho, fue efectivamente alegado dentro d perturbación a la posesión que se censura por vía de tutela[51].

4.4. Lo que se reprocha no es una sentencia de tutela, sino el fallo proferido en el marco de un proceso la posesión.

4.5. Se cumple con el requisito de la inmediatez, por cuanto estando en curso el proceso policivo de an presentó la solicitud de tutela.

Bajo este contexto, la Sala considera que la tutela es procedente para analizar si dentro del proceso pol Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhuaco, se configuró algún defecto específico que genere el consecu al debido proceso.



Ahora bien, a continuación, se precisará en qué consiste el defecto fáctico, dado que a juicio de la Sala de decisión de la jefa de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de D

## 5. Defecto fáctico

La Corte de manera pacífica y reiterada ha señalado que los jueces de conocimiento tienen un gran poder probatorio en cada caso concreto. Por esta razón, ha establecido que, cuando se alega que la prueba tiene un carácter probatorio, el juez de tutela deberá orientar su análisis conforme a los principios de autonomía

Dicha facultad discrecional siempre debe estar concebida bajo el principio de la sana crítica y observar objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros y salvaguardar la Constitución y la ley, por lo que no se convertiría en arbitrariedad judicial, caso en el cual, se configuraría la causal específica de procedencia judicial denominada defecto fáctico[52].

Ahora bien, la Corte, en Sentencia SU-195 de 2012, precisó que el defecto fáctico “tiene lugar siempre cuando el juez de conocimiento no tiene un poder probatorio en que se fundamentó el juez para resolver un caso es absolutamente inadecuado[53]. Para el juez de conocimiento de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar la convicción inspirándose en los principios de la sana crítica [...]”[54], dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La prueba probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos[55], no simplemente supuestos que se ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos[57], esto es, que la administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas

Asimismo, este Tribunal ha precisado que este defecto tiene dos dimensiones. Por un lado, una negativa en la que el juez deja de actuar u omite hacer algo. Ello ocurre, por ejemplo, cuando (i) decide de manera arbitraria para el proceso, (ii) ignora el elemento probatorio u omite su valoración y (iii) da por no probado el hecho probatorio se manifiesta de manera clara y objetiva, sin razón alguna.[60]

Por otro lado, una positiva que ocurre en el momento en que el juez actúa irregularmente (decretando o anulando la prueba, por ejemplo, cuando (i) se han estimado elementos probatorios que no se han debido admitir ni valorar recaudados con violación del debido proceso, (ii) se dan por acreditados hechos que no tienen sustento probatorio, (iii) son inconducentes al caso concreto y (iv) existen errores graves en la apreciación del contenido de una prueba[61].

Resulta de vital importancia destacar que, según la jurisprudencia constitucional, la labor del juez de conocimiento en materia probatoria es libre y autónoma, por lo que, la intervención del juez de tutela frente al manejo de la prueba debe ser reducida. Lo anterior, en armonía con el principio de autonomía judicial y el principio del juez de conocimiento exhaustivo del acervo probatorio en sede de tutela[62].

En ese contexto, la Corte en la Sentencia SU-489 de 2016, respecto de las diferencias en la valoración de la prueba, consideró que “no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a la intervención del juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía, la prueba mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo en la valoración de la prueba, sino que está amparado por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en caso de que no acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima”[63].

Bajo esta línea, resulta claro que la tutela procede cuando “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba sea **ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, para convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente**

En suma, para que proceda la acción constitucional por la configuración de un defecto fáctico, bien sea es necesario que el error pueda calificarse como ostensible, flagrante y manifiesto y, además, sea definido este el único evento que desborda el marco de autonomía de los jueces para formarse libremente su conciencia, que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia adicional que controle la evaluación probatoria del asunto.

Con el objeto de definir la prosperidad del amparo y determinar si en el proceso que se censura se incurrió, es necesario describir el procedimiento que rige el proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión.

## 6. Proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión

En el ordenamiento jurídico colombiano, los titulares del derecho de propiedad, los poseedores o los titulares de las herramientas legales de carácter judicial y administrativo de protección del uso, goce y disposición de bienes amenazados o vulnerados. Entre las primeras, se halla el procedimiento policivo de amparo por perturbación, el cual se encuentra regulado en el Decreto Ley 1355 de 1970[66] y actualmente en la Ley 1801 de 2016.

En 1970 se expidió el Decreto Ley 1355, por medio del cual se adoptó el Código Nacional de Policía. Las acciones policivas de naturaleza civil orientadas a la protección de la posesión y la tenencia de bienes. provisional los inmuebles rurales y/o urbanos de actuaciones que perturbaran las manifestaciones del derecho, las autoridades de policía podían "tomar medidas destinadas a preservar y restablecer la situación existente en la posesión o tenencia" (Art.125).

En el decreto mencionado, por un lado, a quien solicitaba la medida de amparo no se le exigía demostrar ni se consideraban las pruebas que se exhibían para acreditarlo[68]. Lo anterior, por cuanto lo que se pedía con respecto de la tenencia y posesión del inmueble, es decir, rectificar la perturbación y restablecer las cosas en su estado anterior. Por otro, el querellado podía acreditar una causa justificable de su actuar derivada de la condición de autoridad competente, como medio de defensa, para impedir la acción.

Precisamente, esta Corporación en Sentencia T-048 de 1995, definió el amparo policivo contenido en el artículo 125 del Decreto Ley 1355 de 1970:

"(...) un mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de hecho que el poseedor o tenedor ejerce específicamente en una servidumbre (arts. 125 y 128), sin que importe en cada caso concreto la valoración personal que el actor pudiera tener (propiedad, uso, usufructo, servidumbre, arrendamiento, etc.).

En el 'amparo policivo' no se discute ni decide, por tanto, sobre la fuente del derecho que protege al actor, lo que el debate se limita exclusivamente a preservar o a restablecer la situación de hecho al estado anterior a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el bien. Ese es el sentido con que se regula por la figura del amparo. Así se expresa esta norma:

'La Policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento de la perturbación'."

Bajo esas consideraciones, resulta claro concluir que la finalidad del proceso de perturbación a la posesión es cautelar, prevenir e impedir la vulneración y el desconocimiento de la situación fáctica que se origina y se despliega sobre los bienes, amparando la integridad del mismo y garantizando la protección del statu quo como perturbatorio y así recobrar la condición existente con anterioridad.

En la actualidad, el proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión, se encuentra regulado en el Título VII se establece dentro de las denominadas "acciones de protección de los bienes inmuebles" este proceso. Los efectos de dicha normatividad, especialmente, los relacionados con el presente apartado, la posesión, no se hace alusión están definidos por los artículos 762, 775 y 879 del Código Civil (Art. 76). Describe cómo perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que impiden el uso y disfrute de la posesión o tenencia de un inmueble al titular de este derecho y demás, frente a lo que se adopta (Art. 77). Dispone que la querrela puede ser presentada ante el Inspector de Policía por "el titular de los inmuebles particulares o de las servidumbres; las entidades de derecho público; y los apoderados o mandatarios mencionados" (Art. 79). También indica este Código que se debe comunicar al propietario inscrito la interposición al perjuicio de que se lleve a cabo la diligencia prevista (Par. 2, Art. 79); e impone a la Superintendencia de Registros Públicos, Agustín Codazzi y las administraciones municipales, la obligación de suministrar la información solicitada a las autoridades de policía (Par. 3, Art. 79). Prevé, adicionalmente, que "cuando por caso fortuito o fuerza mayor excepcionalmente deba suspenderse la audiencia pública, la autoridad competente decretará el statu quo dejando constancia y registro documental, fijando fecha y hora para su reanudación" (Par. 4, Art. 79). En materia de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres es una "medida de carácter precario y provisional, de carácter de mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de la controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar" (Art. 80).

Sobre este último punto, resulta importante destacar que cuando se consagra que el amparo de la posesión o servidumbres es una "medida de carácter precario y provisional", no cambia la naturaleza y dinámica de la acción anterior Código de Policía. Basta ubicar el Título en el que se encuentra el artículo que así lo dispone y en la Ley 1801 de 2016, para comprender que el Legislador quiso que la autoridad de policía, no definiera quién es el titular de la controversia, sino que resolviera el litigio frente a la tenencia pacífica de un bien, motivo por el cual la acción es de justicia ordinaria. Así, el art. 80 citado no suprime el carácter definitivo de la decisión que se profiere en materia de objeto de lo que se protege: el statu quo de la situación de las personas frente a sus bienes y no el derecho de posesión.

La expresión "el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar" recalca el objetivo pretendido por este juicio: finiquitar una perturbación ilegal. Con todo, ha de destacarse que, desde la normatividad anterior, en materia de "provisionalidad" de las medidas ha estado latente, por cuanto estos trámites no definían derechos de posesión o económicas, sino que la protección se dirigía a la tenencia o posesión legítima del inmueble. Así, al imponer el mantener el statu quo, se aclara que en esta clase de acción no se determina quién tiene mejor derecho sobre el predio, o su titular, sino mantener el statu quo.

En suma, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, en el procedimiento de amparo se discute sobre la fuente del derecho que protege al querellante o a los querellados. Lo que se busca en esta situación de hecho al estado en que se encontraba antes de que ocurriera la perturbación o pérdida de la posesión, es ahí que cualquier debate relacionado sobre la titularidad de los derechos ha de ser dirimido ante la jurisdicción de policía y convivencia.

Ahora bien, para que prosperen las pretensiones del querellante se requiere que este sea el tenedor o poseedor de la cosa o hechos perturbatorios que impiden el goce pleno de la cosa, que tales hechos sean arbitrarios y no se justifiquen por ley dado que deben ser el resultado del actuar del querellado (vías de hecho), y que exista relación causal entre el hecho y la querrela.

Finalmente, ha de anotarse que el Código Nacional de Policía y Convivencia adoptado con la Ley 1801 de 2017, en relación con la aplicación de la Ley consagra en su artículo 239 que: "[l]os procedimientos

policía, así como los procedimientos administrativos sustituidos con la presente ley, que a la fecha de e estén surtiendo, serán adelantados hasta su finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de motivaron su iniciación".

## 7. Concepto de bienes de interés cultural

La Corte ha resaltado que el artículo 72 de la Constitución prevé el mandato de protección a cargo del bienes"[69], a saber: "(i) el patrimonio cultural de la Nación, (...) (ii) el patrimonio arqueológico (...) y identidad nacional"[70]. Sobre éstos últimos, ha reiterado que son inalienables y que el Legislador deb readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares[71]. También y a partir del mandato consi "categoría de bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación (...): los bienes de interés cultural mediante la Ley 397 de 1997.

Así, los bienes culturales, hacen parte del patrimonio de la Nación, se encuentran bajo la protección de nacional. También, poseen un especial interés (histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, url ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, científico, testimonial, documental, litera antropológico, entre otro) para la cultura nacional.

A su vez, la declaratoria como bien de interés cultural -BIC-, entendida como el acto administrativo m cumplimiento del procedimiento previsto al efecto (Art. 5 ídem), determina que dicho bien queda cobij protección o de salvaguarda (Art. 1, literal b ídem) del patrimonio cultural de la nación.

El Ministerio de Cultura, es competente en tratándose de aquellos bienes del ámbito nacional; y de las los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, a través de las gobernaciones, alcaldí de aquellos bienes del ámbito territorial[74].

La declaratoria conlleva a que el bien, incluso cuando es privado: (i) quede sujeto a las disposiciones d encuentre sometido a un régimen especial de protección que obliga a obtener una autorización proferid declaración cuando se trate de intervenirlo; (iii) si queda colindante con otros inmuebles, o estos se enc influencia, será necesaria obtener la autorización mencionada para efectos de adelantar obras en ellos; bienes de interés cultural, y (v) se someta a un tratamiento aduanero especial.

Adicionalmente, siguiendo la Ley 1185 de 2008[76], artículo 1, pueden ser muebles o inmuebles, públ **departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras de c de lo cual, se asignan competencias, entre otras, en materia de conservación y preservación; y est especial, en materia de intervención, exportación y enajenación** (Art. 7 ídem), cuyo incumplimiento pu administrativas, y/o disciplinarias) si constituye una falta contra el patrimonio cultural (Art. 10 ídem).

Al efecto, se faculta al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al A entidades territoriales en lo de su competencia, con funciones policivas para la imposición y ejecución definitivos y demás sanciones establecidas, que sean aplicables según el caso (parágrafo, Art. 10 ídem)

Conforme a lo anterior, los bienes de interés cultural son (i) muebles o inmuebles, (ii) públicos o priva territorial, (iv) sujetos a un régimen de protección especial, cuyo incumplimiento puede generar sanció funciones policivas al Ministerio de Cultura y demás entidades señaladas, conforme sus competencias, preservación.

### 7.1. Competencia del Ministerio de Cultura en relación con los bienes de interés cultural

Ahora bien, en los bienes de interés cultural del ámbito nacional, como es el presente caso[77], la conformidad con el Decreto 763 de 2009[78], comprende:

"Artículo 4° (...)

1. Del Ministerio de Cultura.

1.1. Competencias generales sobre BIC del ámbito nacional (...)

i. Formular la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, y coordinar el Sistema Nacional, para lo cual fijará las políticas generales y dictará lineamientos técnicos y administrativos, a las personas que integran dicho sistema.

ii. Reglamentar los criterios de valoración que deberán aplicar todas las instancias competentes del ámbito BIC.

(...)

iv. Establecer aspectos técnicos y administrativos relativos al contenido general de los Planes Especiales -PEMP-, de los BIC del ámbito nacional y territorial, de conformidad con la Ley 397 de 1997 modificado por decreto.

v. Determinar cuáles BIC declarados previamente a la expedición de la Ley 1185 de 2008 en los ámbitos PEMP y el plazo para adoptarlo, si fuere necesario en forma adicional a lo establecido en este decreto.

(...)

xiii. Destinar los recursos que las leyes sobre la materia y las correspondientes leyes anuales de presupuesto relativas al Patrimonio Cultural de la Nación".

También contempla, el mencionado decreto, competencias específicas sobre BIC del ámbito nacional:

"Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural

i. Elaborar y administrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional que podrían llegar a ser declarados como BIC en dicho ámbito.

ii. Definir cuáles de los bienes incluidos en la Lista de que trata el numeral anterior requieren un Plan Especial -PEMP-.

Declaratorias y revocatorias

iii. Efectuar las declaratorias de los BIC del ámbito nacional.

iv. Revocar los actos de declaratoria de BIC del ámbito nacional por razones legales o cuando los respectivos valores que dieron lugar a la declaratoria.

v. Someter al concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural los actos antes enumerados que requieren el concepto del Consejo, y acoger dichos conceptos cuando tengan carácter obligatorio.

## Régimen Especial de Protección de BIC

vi. Actuar como instancia competente en lo relacionado con la aplicación del Régimen Especial de Protección de Bienes de Interés Cultural. Trata el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, respecto del ámbito nacional o de los declarados como tal con anterioridad a la Ley 1185 de 2008.

vii. Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los declarados como tal de 2008, si tales bienes requieren dicho plan, previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

viii. Autorizar las intervenciones en BIC del ámbito nacional, así como aquellas que se pretendan realizar en bienes colindantes con dichos bienes. (...)

## Sanciones

xvi. Aplicar o coordinar, según el caso, respecto de los BIC del ámbito nacional el régimen precautelador establecido en el artículo 15 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008 (...)" (artículo 10 de la Ley 1185 de 2008).

El listado de competencias permite afirmar que el Ministerio de Cultura interviene respecto de los bienes de interés cultural en: (i) la gestión cultural en términos de política pública, criterios de valoración, aspectos técnicos y administrativos; (ii) la elaboración y definición de la Lista Indicativa de Candidatos a BIC; (iii) la declaración o revocación de BIC; y (iv) la aplicación del régimen especial de protección de BIC.

Adicionalmente, sus facultades policivas se relacionan con la aplicación de sanciones por las faltas cometidas que vulneran el deber constitucional de protección. Por ejemplo, con la intervención en el BIC sin la realización de obras en inmuebles colindantes o del área de influencia del BIC, también sin autorización, en donde se produce la suspensión inmediata de la actividad, la imposición de multa, y/o la obligación del implicado de volver a la normalidad.

Así las cosas, el Ministerio de Cultura ostenta una competencia que se circunscribe a la salvaguarda, en el ámbito nacional, y por tanto su actuación y responsabilidad están dadas en términos de conservación del interés cultural.

## 8. Caso concreto

8.1. La Sala de Revisión se ocupará, en primer lugar, de determinar si la decisión proferida por la jueza de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Alcaldía Municipal de Dibulla, en el trámite del proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión, incurrió en la causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales denominadas "falsas condenas".

Para la comunidad indígena demandante, la mencionada funcionaria al resolver el proceso policivo se basó en el derecho de los predios involucrados con lo cual desconoció que en dicho procedimiento: (i) solo se puede interponer la tutela por perturbación a la posesión o mera tenencia, y (ii) no se controvierte el derecho de dominio ni tampoco se hace referencia a esta clase de disputa.

Con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado, se expondrá a continuación las actuaciones en el proceso de amparo por perturbación a la posesión con el fin de entender el contexto en el que se desarrolló dicho trámite y la valoración probatoria que efectuó la funcionaria accionada para determinar la configuración o no del derecho de posesión.

### 8.1.1. Actuaciones surtidas en el proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión

En el expediente de tutela reposa copia del proceso policivo promovido por Carmela Segunda Brito de Moya y Mirta Felicia Caldera Contreras contra el Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhuaco (Gonawindua Ta

actuaciones:

-Presentación de la querella. Elis Cecilia Brito Caldera en representación de las señoras Brito de Restrepo el 23 de diciembre de 2016, presentó ante la Alcaldía Municipal de Dibulla una querella policiva[79] "EL CHOCHO, LA LOLA, EL PRADO y LA MARÍA," ubicados en el paraje La Puntica, municipio de "legítima propiedad" de Lorenza Helena Redondo Vda. de Brito, Lucas Manuel Brito Redondo, Carme Valentín Brito Redondo.

Las querellantes señalaron que desde el 15 de julio de 2015 se les ha obstaculizado ejercer la posesión propietarias cuando se les impidió reconstruir una vivienda en el predio denominado El Prado, lo cual del lugar (inspector de policía)[80].

Manifestaron que los inmuebles sobre los cuales recae esta reclamación jamás han sido abandonados, legítimos propietarios y poseedores regulares. Sin embargo, la posesión de los mismos ha sido perturbada por personas que ocupan ilegalmente los bienes.

Advirtieron que las autoridades competentes han consentido que personas indeterminadas ejerzan actos de construir una enramada. Adicionalmente, dicen que les fue hurtada una madera cuyo costo asciende a la cual iba a ser destinadas en los trabajos de reconstrucción.

Destacaron que si bien no se les ha impedido el ingreso a los predios, por tratarse de una "playa casi de existiendo títulos de primera categoría, los cuales fueron radicados en la Inspección Central de Policía garantizar el derecho de posesión, por lo menos, en el predio El Prado y, de no ser así, teniendo en cuenta de 2015, fecha en la que se verificó la duplicidad de registros e inscripción irregular de predios, específicamente el inspector central de policía, Dr. Erlín Suárez Cassiani debió decretar la medida de statu quo y poner la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo de Riohacha. No obstante, omitió cumplir sus funciones al ejercer las acciones judiciales ordinarias, sin asignarle a la actuación administrativa siquiera un número

-Admisión de la querella. La jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla, Cárdenas, mediante Auto No. 023 del 17 de enero de 2017 admitió la querella referida en el numeral anterior como fecha para la realización de la inspección ocular en el predio ubicado en el paraje La Puntica contenido a las partes[81].

-Audiencia pública y diligencia de inspección ocular. El 24 de marzo de 2017 se realizó la referida audiencia y presentaron cada uno de los participantes de la diligencia[83] y (ii) se procedió a escuchar a las partes.

-Queja del 5 de junio de 2017. La representante de las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras, la Jefe de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Dibulla que desde hace algún tiempo vienen merodeando por los cuatro predios de nuestra propiedad y posesión". Advirtió que existe una querella abierta por una fraudulenta compraventa de los referidos predios, que involucra a varios entes públicos[85].

-Diligencia de inspección ocular. El 23 de junio de 2017, la jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana Municipal de Dibulla, Juan José Novalita -coordinador del territorio del Cabildo Indígena Kogui Malayo, la representante de las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras (partes en la querella por posesión) se dirigieron al predio El Chocho[86].

-Acción preventiva por perturbación. El 30 de junio de 2017 se realizó el procedimiento establecido en el artículo 100 del Código de Procedimiento Civil de 2016[87].

-Audiencia pública. El 19 de julio de 2017, la jefe de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Riohacha, en la audiencia[88], en la cual: (i) se presentaron cada uno de los participantes de la diligencia[89] y (ii) se p

#### 8.1.2. Valoración probatoria efectuada por la jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana

La Sala observa que según lo consignado en la Resolución No. 019 del 01 de agosto de 2017[91], la fue el análisis de los diferentes títulos aportados en el proceso policivo y (ii) se pronunció sobre este derecho de controversia, como se expone a continuación:

#### ANALISIS DE LOS TITULOS PRIMITIVOS -RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE PREDIO B INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA- "INCORA"

PREDIO	RESOLUCION No	AREA	LI
EL CHOCHO	2.01-723 del 20 de agosto de 1971	37 hectáreas 7.600 M <sup>2</sup>	NORTE: Lucas Bri ESTE: Playas del M SUR Y SUROESTI OESTE: Tomás Val
LA MARÍA	2.01-728 del 27 de agosto de 1971- consecutivo: 182937	42 hectáreas 7.000 M <sup>2</sup>	NORTE: Sabas Rec ESTE: Néstor Cam SUR: Carmela Rest OESTE: Lorenza H
LA LOLA	2.01-592 del 20 de abril de 1971- consecutivo: 182854	36 hectáreas y 1.400 M <sup>2</sup>	NORTE: PLAYAS ESTE: Lorenza Vda SUR: Carmenza Se OESTE: Fosi3n Alr
EL PRADO	2.01-593 del 20 de abril de 1971- Consecutivo: 182855	38 hectáreas y 3.600 M <sup>2</sup>	NORTE: Lucas M. ESTE: Tomás Vale SUR: Gustavo Roja OESTE: Fosi3n Alr

#### ANALISIS DE LOS TITULOS APORTADOS A ESTA QUERELLA POLICIVA INVOLUCRADOS RECIENTE:

Contrato de compraventa de LORENZA REDONDO de BRITO a JAIME G3MEZ TRUJILLO, a los 3 en la ciudad de Riohacha- La Guajira, de 3 y , (tres y media hectáreas) del predio "EL CHOCHO", Ali SUR: Lorenza Redondo de Brito, ESTE: Antonio Brito Redondo, OESTE: Lorenza Redondo de Brito

El contrato de compraventa suscrito el día 06 de julio de 1978, en la ciudad de Medellín- Antioquia, er ALZATE y JAIME G3MEZ TRUJILLO, quien vende 3 (Tres y media hectáreas), que hacen parte d así: NORTE: Mar Caribe, SUR: Lorenza Redondo de Brito, ESTE: Antonio Brito y OESTE: Lorenza l

PRIMER ESCRITO A MÁQUINA PROVENIENTE DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUM DEL CIRCUITO DE RIOHACHA- LA GUAJIRA EN RELACION A COMPRAVENTAS AÑOS 19 DE BRITO A JAIME G3MEZ TRUJILLO Y DE JAIME G3MEZ TRUJILLO A HORACIO HOYOS



PREDIO	RESOLUCION No	AREA	LIN	
EL CHOCHO 210-0051560	2.01-723 del 20 de agosto de 1971	37 hectáreas 7.600 M <sup>2</sup>	NORTE: Lucas Brito ESTE: Playas del MAR SUR Y SUROESTE: S OESTE: Tomás Valenti	
PRIMERA ANOTACION EN EL NÚMERO DE MAT. INM. 210- 0051560	Anotación 15/09/1972 Radicación 2009-6514	Escritura No 688 del 04/09/1972	DE: REDONDO DE BI A: BUSTAMANTE BE A: BUSTAMANTE BE A: HOYOS GÓMEZ R	
ACTO	PREDIO	PERSONAS QUE INTERVIENEN	AREA	
COMPRAVENTA	LA MARINA	ANTONIO FRANCISCO BRITO REDONDO Y JAIME GÓMEZ TRUJILLO	4 hts.	NORT SUR: VENE ESTE: predios OESTE Vda. D
Observaciones	Este predio no es conocido en la zona donde se identifican y ubican los predios			

#### TITULOS APORTADOS QUE AMPARAN LA NEGOCIACION DE LA PARTE QUERELLADA

ACTO	ESCRTURA	PERSONAS QUE INTERVIENEN	IDENTIFI	
COMPRAVENTA	2906 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012	CARLOS ANDRÉS HOYOS OCAMPO RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO	C.C 94.321.721 NIT: 819.005.279-1	
PREDIO	MAT.INM.	COD. CATASTRAL	AREA	
LA MARÍA	210-1161	00-02-0001-0175-000	42 HECTAREAS 7.000 MTS CUADRADOS	N E S O R
EL CHOCHO	210-51554	00-02-0001-0177-000	37 HECTAREAS 7.000 MTS <sup>2</sup>	N R E R S R O

				C
EL PRADO	210-15545	00-02-0001-0177-000	38 HECTAREAS	N E S O
Observaciones	Predio: "EL PRADO", tiene DUPLICIDAD DE CERTIFICADOS DE MATI siendo el primitivo u originario el número: 210-5775. Los predios: "EL CHOCHO" - "EL PRADO", comparten el mismo Código cat El predio "LA LOLA", es mencionado en la E.P. No: 2906 del 7 de dicier identificado, ubicado, ni descritas su colindancias.			

ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN NÚMERO: 1693 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE I  
RIOHACHA-LA GUAJIRA

ACTO	OTORGADA POR	A FAVOR DE	PREDIO	AREA
Protocolización de la compraventa	MUNICIPIO DE DIBULLA Y LUIS ALFONSO DEL PRADO AMAYA	AMPLIACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACUO	LA MATUA	9 HTS

-La funcionaria accionada en la Resolución No. 019 del 01 de agosto de 2017, concluyó:

"En lo referente a las diferentes inscripciones ante la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO  
RIOHACHA, LA GUAJIRA, realizadas en los certificados de matrículas inmobiliarias de cada uno de  
despacho acude a la ley 1579 del 1° de octubre de 2012, por lo (sic) cual se expide el Estatuto de Regis  
dictan otras disposiciones, regido por principios tales como: legalidad, legitimación, por lo que los asie  
de veracidad y exactitud, entre otros requisitos, que para el caso concreto no se cumplen.

En aras de la SEGURIDAD JURÍDICA en las transacciones inmobiliarias, como parte del engranaje e  
de la propiedad de tierras, siendo la seguridad jurídica, la garantía de la veracidad de la información y l  
reposan en las bases de datos de las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos y los datos del cata  
garantice la existencia de datos veraces, tanto en cuanto a la situación jurídica, como de los datos relati  
tal suerte, que no haya lugar a apropiaciones indebidas de terrenos de propiedad privada.

Este Despacho, ha tenido en cuenta los títulos inscritos, pues existen irregularidades en los datos catastr  
tratándose de tres (3) folios de matrícula, que por separado (especialidad), existen en la Oficina de Inst  
encuentren bajo un mismo número catastral, esto es, los predios "EL CHOCHO- "EL PRADO" (en el I  
LOLA", comparten un mismo número catastral, es decir, el 00177.

En cuanto a la ubicación de los predios en la carta catastral este despacho ha tenido en cuenta, los títul  
denominado: 'LA MARÍA' (Carta análoga y digital), del IGAG, el cual no coincide con el plano que ac  
planos geo-referenciados /levantamiento topográfico recientemente realizado, también aportado a este

Deberá sin duda alguna, buscarse una solución jurídica, debido a las innumerables inconsistencias que

que deben prevalecer en las transacciones inmobiliarias, en aras de la protección al bien jurídico de la l fortalecimiento de los procedimientos jurídicos del catastro, para con el aporte de documentación o títu predios involucrados en este asunto, en los cuales no existen linderos confusos, sino precisos, la ubicac 'calcar' la forma que corresponde en el título primitivo. Instrucción Administrativa Conjunta No. 01 de NOTARIADO Y REGISTRO del 20 de mayo de 2010 y Resolución No. 2555 de 1998 IGAC.

Concretando las distintas acciones, mediante las cuales se ha requerido de este despacho el cese de los 'EL CHOCHO', 'EL PRADO', 'LA LOLA' y 'LA MARÍA' de manera específica me referiré al predio de adjudicado al señor LUCAS MANUEL BRITO REDONDO (Q.E.P.D), y en cuya representación actúa BRITO SOLANO, sin que se vulnere el principio Pro Actione, pues, no se la dificultado acceder al eje para la que faculta la ley a esta OFICINA, así, como tampoco hemos actuado en contra de los postulad derechos inherentes a este tipo de acciones públicas.

-Con base en lo anterior, la jefe de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de D de agosto de 2017 resolvió: (i) conceder el amparo policivo sobre los predios El Chocho, El Prado y L; lo concerniente al predio denominado La Lola y (iii) dejar en libertad a las partes involucradas de acud controversias que se salen del ámbito de competencia de este despacho[92], lo cual se mantuvo en las Resolución No. 029 del 14 de noviembre de 2017[93], Resolución No. 176 del 24 de julio de 2018[94] septiembre de 2018.

Recuérdese que desde la expedición del Decreto Ley 1355 de 1970, Código Nacional de Policía, se conde amparo no se le exigía demostrar o controvertir el derecho de dominio ni se consideraban las pruebas. Lo anterior, por cuanto lo que se pretendía era restituir el statu quo respecto de la tenencia y posesión con perturbación y restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes.

Dicha finalidad, en la actualidad, con la Ley 1801 de 2016 se mantiene al consagrar que el amparo de l servidumbres es una "medida de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya única finali el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en contr correspondientes, si a ellas hubiere lugar" (Art 80).

decisión adoptada por la autoridad de policía, en el procedimiento anotado, no define quién es el titular sino que resuelve el litigio frente a la tenencia pacífica de un bien, motivo por el cual las partes implicadas en el proceso son las partes ordinarias, con lo cual se recalca el objetivo pretendido por este juicio policivo que es el de recuperar el bien ilegal.

Llama la atención de la Sala que en el fallo cuestionado no consta la valoración de los elementos probatorios. Brito acreditó la posesión sobre los predios La Lola, El Prado y La María lo cual resulta de vital importancia policiva[98] y respecto de la posesión de la comunidad indígena accionante textualmente se lee: "**El Resguardo Indígena Arhuaco**, se encuentra asentado físicamente en el predio denominado 'LA LOLA', es decir, el Resguardo con ánimo de señor y dueño...". Posteriormente, se aclaró que el predio es El Chocho.

Para la Sala de Revisión, la actuación de la funcionaria demandada resulta además reprochable porque valoró las pruebas que allegaron las partes para acreditar el derecho de dominio, discusión del todo ajena frente a la disparidad que evidenció de la información entre la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo Geográfico Agustín Codazzi -IGAG- la relacionó con la nota periodística en la que se consigna que la comunidad está padeciendo por la escrituración de lotes de su legítima propiedad a nombre de personas ajenas a esos derechos.

Con lo anterior, dejó en entredicho el negocio jurídico de compraventa en el que fue parte la comunidad indígena. En otros escenarios ha sido entendida bajo el supuesto de falta de información catastral o información incorrecta.

8.2. En segundo término, la Sala de Revisión analizará si el Ministerio de Cultura incurrió en una omisión de sus funciones frente a un bien declarado de interés cultural del ámbito nacional al no intervenir en un proceso de perturbación a la posesión que se adelantó sobre el mismo. En criterio de la Sala de Revisión no se evidencia la omisión, pasa a explicarse.

En efecto, la condición de BIC del ámbito nacional de los predios donde se encuentra el sitio sagrado Jamboré, no otorga competencias al Ministerio de Cultura respecto de intervenir en asuntos en los cuales se debate sobre la propiedad, sino que habilita para tomar medidas restitutivas del statu quo sobre derechos reales. Así mismo, debe tenerse en cuenta que el BIC no refiere, ni se relaciona, modifica o reconoce derecho subjetivo alguno, sino, como se expuso, atribuye importancia para la identidad nacional y, por tanto, no afecta su titularidad, ni le faculta al ministerio, ni garantiza o interesa en disputas reales.

Adicionalmente, las restricciones que impone la declaratoria BIC, y que llaman al Ministerio de Cultura a velar por el usufructo, tampoco a su perturbación, sino a su conservación, y por tanto la entidad no puede disponer. Por lo tanto, del ministerio se limita a la protección del BIC, e incluso sus facultades sancionatorias, solo se relacionan con el bien y constituyen infracciones, que desembocan en medidas pecuniarias; por lo que se encuentra bastante con el propósito del proceso policivo de amparo.

La competencia de lo anterior, está atribuida a las autoridades del nivel territorial, policivas o administrativas, y mal haría una entidad nacional, al intervenir, en un proceso que no se encuentra dentro de sus funciones. En las consideraciones expuestas, al revisar el expediente no se encuentra prueba o indicio alguno sobre la no iniciación del proceso policivo de amparo de la posesión sobre el BIC, objeto de esta tutela, ni que tuvo lugar alguna omisión, sino solo hasta la presentación de la acción constitucional, cuando ya se le endilga la omisión de la Sala de Revisión, jurídicamente inviable, atribuir o deprecar responsabilidad alguna a la cartera ministerial.

Conforme lo expuesto, la Sala no advierte omisión alguna, ni vulneración de derechos por parte del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no es el responsable de la omisión de la Sala de Revisión, sino el Ministerio de Kogui Malayo Arhuaco.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sala REVOCARÁ la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Riohacha, el 23 de enero de 2018, en el trámite del proceso de tutela T-6.765.245. En su lugar, concederá el amparo por perturbación sobre los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho y adopte una decisión conforme a las pruebas que demuestren la posesión y los demás elementos para conceder el amparo por perturbación a la parte que así lo acredite.

Lo anterior porque el proceso policivo de amparo por perturbación concluyó con fallo de segunda instancia que ordena conceder el amparo policivo en tres de los cuatro predios involucrados en la querella, circunstancia que agota los recursos ordinarios de defensa. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que contra las decisiones que ordenan el amparo por perturbación procede recurso alguno ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, no desconoce la titularidad de los derechos de los predios objeto de la querella ha de ser dirimida a través del proceso de tutela.

En consecuencia, la Sala dejará sin efectos las Resoluciones No. 019 del 01 de agosto de 2017; 029 del 14 de julio de 2018 y 223 del 17 de septiembre de 2018 proferidas en el proceso policivo de amparo por perturbación por parte de Elis Cecilia Brito Caldera en representación de Carmela Segunda Brito de Restrepo, Adalgisa María B. Contreras contra el Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhuaco (Gonawindua Tayrona) por las razones expuestas. Ordenará al inspector de policía urbana del municipio de Dibulla que tramite nuevamente el proceso policivo sobre los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho y adopte una decisión conforme a las pruebas que demuestren la posesión y los demás elementos para conceder el amparo policivo a la parte que así lo acredite.

### III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el amparo de la constitución,

#### RESUELVE

PRIMERO. - LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente asunto.

SEGUNDO. - REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, el 23 de enero de 2018, en el trámite del proceso de tutela T-6.745.652. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de posesión y uso pacífico de la tierra de la comunidad indígena Kogui Malayo Arhuaco.

TERCERO. - DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones No. 019 del 01 de agosto de 2017; 029 del 14 de julio de 2018 y 223 del 17 de septiembre de 2018 proferidas en el proceso policivo de amparo por perturbación por parte de Elis Cecilia Brito Caldera en representación de Carmela Segunda Brito de Restrepo, Adalgisa María B. Contreras contra el Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhuaco (Gonawindua Tayrona) por las razones expuestas.

CUARTO. - ORDENAR al inspector de policía urbana del municipio de Dibulla que tramite nuevamente el proceso policivo sobre los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho y adopte una decisión conforme a las pruebas que demuestren la posesión y los demás elementos para conceder el amparo policivo a la parte que así lo acredite.

QUINTO. - Por Secretaría General, LÍBRESE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el sitio web de la Corte Constitucional y cúmplase.

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] La Sala Quinta de Revisión conformada por el Acuerdo 4 de 2017 de Sala Plena conserva su competencia correspondiente proceso, de conformidad con el Parágrafo transitorio del artículo 1 del Acuerdo 01 de

[2] El presente capítulo resume la narración hecha por la comunidad indígena accionante, así como otros observados en el expediente, los cuales se consideran relevantes para comprender el caso.

[3] Cuad. 2, fls. 125 a 129.

[4] Cuad. 2, fls. 114 a 124.

[5] Cuad. 2, fls. 168 a 178.

[6] "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA QUERRELLA POLICIVA INSTAURADA POR EN REPRESENTACIÓN DE CARMELA SEGUNDA BRITO, ADALGISA BRITO SOLANO Y MUJERES CONTRA CABILDO INDÍGENA KOGUI MALAYO ARHUACO (GONAWINDUA TAYRONA)".

[7] En la Resolución No. 019 del 1 de agosto de 2017, la jefa de la Oficina de Seguridad y Convivencia de Dibulla, fundamentó su decisión bajo los siguientes argumentos:

-Según la Ley 791 de 2002 uno de los medios de adquirir el dominio es mediante la prescripción adquisitiva cuando se ha poseído el bien durante cinco años. En el caso concreto respecto de los predios La Lola, El Prado y El Chocho, transcurrido dicho término, toda vez que la venta se efectuó el 27 de diciembre de 2012 y la querella por nulidad de 2017.

-Resultan relevantes las condiciones naturales del terreno, pues permite que el acceso a los predios sea cercados.

-En lo referente a las diferentes inscripciones ante la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo de Fomento de matrícula inmobiliaria de cada uno de los 4 predios se tendrá en cuenta la Ley 1579 de 2012. Así, en lo jurídico, se considerará la correspondencia de los datos que reposan en las bases de datos de la mencionada oficina, tal forma que se garanticen los datos veraces respecto de la situación jurídica de los inmuebles y el aspecto catastral.

-Se considerarán los títulos inscritos por cuanto existen irregularidades en los datos catastrales que se tienen en cuenta en las matrículas tengan la misma cédula catastral (El Prado, La María y El Chocho).

-En cuanto a la ubicación de los predios en la carta catastral, se considerarán los títulos primitivos inscritos (carta análoga y digital) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no coincide con el plano que acompaña los planos geo-referenciados/ levantamiento topográfico recientemente realizado.

-Reposa en el expediente copia de recorte de periódico en que se consigna que la comunidad Dibullera escrituración de lotes de su legítima propiedad a nombre de personas ajenas a esos derechos.

-En el predio La Lola se encuentra asentado la comunidad indígena, es decir, ejerce posesión desde el 1 de 2012). A pesar de que se realizó un juicioso estudio de títulos (justo título), se deberá acudir a la jus controversia que versa sobre este inmueble porque no se tiene la facultad para dirimirla.

[8] El 14 de agosto de 2017. Cuad. 2, fls. 281 a 283.

[9] El 16 de agosto de 2017. Cuad. 2, fls. 284 y 285

[10] El 07 de noviembre de 2017. Cuad. 2, fls. 294 a 301.

[11] "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN 019 DEL 2017 EMITIDO POR LA JEFE DE LA OFICINA DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA." Cuad. 2, fls. 338 a 340.

[12] En la Resolución No. 029 del 14 de agosto de 2017, la jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Municipal de Dibulla, fundamentó su decisión bajo los siguientes argumentos:

-Advirtió que el recurso interpuesto por el Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Kogui Malayo extemporáneo, dado que conforme al artículo 76 de la Ley 1437, el término para presentarlo es de diez siguiente de la notificación de la decisión que para el caso concreto venció el 17 de agosto de 2017.

-Del estudio minucioso de los planos de los predios La Lola, El Prado, La María y El Chocho, de las partes, se concluye que este caso es uno más de "COMPRAVENTA IRREGULAR DE PREDIO

-Que por la Geografía del lugar jamás han existido cercas o alambrados y aunado a que la familia Brito de la que dan fe las pruebas y personas de este municipio, amerita la intervención directa no solo de es del Área Jurídica y del Alcalde Municipal.

-Resulta aceptable el argumento de la representante de las querellantes y de Lucas Manuel Brito Solano ocupado por la comunidad es el denominado El Chocho y no La Lola.

[13] "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN Y SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 019 DEL 2017." Cuad. Principal, fl. 36.

[14] "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 176 EMITIDA POR LA JEFE DE LA OFICINA DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA" .Cuad. Principal, fl.35.

[15] "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley de Cultura- y se dictan otras disposiciones para la imposición y ejecución de medidas, multas, decomisos definitivos y demás sanciones

[16] Según el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, además del Ministerio de Cultura, según sea el caso, la autorización cuando se trata de intervención, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, del Departamento de Antropología e Historia de las entidades territoriales.

[17] De conformidad con el parágrafo 1º. Del artículo 10 de la Ley 1185 de 2008 "[e]l Ministerio de Cultura, el Departamento de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y las entidades territoriales en lo de su competencia, dictarán las políticas para la imposición y ejecución de medidas, multas, decomisos definitivos y demás sanciones

aplicables según el caso".

[18] La apoderada judicial destaca que el concepto de ancestralidad denota un proceso relacional con el territorio social como territorio de los ancestros, la vida comunitaria en particular y la lengua indígena, lo cual en el presente caso, la vida comunitaria de los indígenas demandantes no se realizaba en estos predios y, actualmente, la familia Brito siempre los han ocupado y ha ejercido posesión legítima. Se puede verificar que, en el día, "cuidan" el lugar pero como tal, allí no permanece la comunidad.

[19] Según la apoderada judicial de la familia Brito esta anotación manuscrita se realizó cuando fungió Yiber Anturi Urueña.

[20] La comunidad indígena Kogui Malayo Arhuaco mencionó unas escrituras públicas que presuntamente son cuatro predios (La Lola, El Prado, La María y El Chocho) por parte de la familia Brito a la familia Hoy. La prohibición que para ese entonces pesaba legalmente, consistente "en la NO venta inmediata de predio Colombiano". Estos documentos no fueron aportados a la querrela policiva que dio lugar a la presentación de un archivo de documentación del antiguo sistema de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Prácticamente aparecen las resoluciones de adjudicación por parte del Incora. En efecto, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha en respuesta a una solicitud presentada por las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras de petición señaló que en los archivos de esa dependencia no existen las escrituras y documentación que se realizaron en cada uno de los certificados de matrícula inmobiliaria relacionados con ese negocio jurídico.

[21] "Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral"

[22] De la ausencia de calidad en la información catastral, consagrada en el artículo 24 de la Resolución No. 70 del 4 de febrero de 2011, según la apoderada judicial de la familia Brito surgen los siguientes interrogantes: "¿De dónde sacó la información catastral, esa información catastral, para consignarla en el CERTIFICADO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA [terreno] 'LA LOLA'?, ¿Cómo es, que si no existe un plano familiar, y jamás se ha elaborado una escritura pública que un solo código o cédula catastral IDENTIFICA a tres (3) predios, que gozan de características físicas y con ubicación geográfica [distinta], ya que los [inmuebles] 'El Prado' y 'La María' **están** a pesar del transcurso del tiempo, se encuentra invariable, sin modificación alguna, de lo que dan cuenta los planos topográficos?, ¿Cómo se explica además que la INFORMACIÓN ASPECTO JURÍDICO -SNR- indicados en los certificados con matrículas inmobiliarias **DIFERENTES** y no obstante, la información catastral está **ÚNICA** frente al aspecto ECONÓMICO-FISCAL que pudieran pagarse ante la SECRETARÍA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE DIBULLA –LA GUAJIRA, los impuestos correspondientes al predio 'LA LOLA', sin aparecer en el inventario catastral y por ende, NO aparece en las cartas catastrales y cuando además se le asignó un número catastral, debiendo ser único, es compartido o comunitario?"

[23] Artículo 31 de la Resolución No. 70 del 4 de febrero de 2011.

[24] Artículo 32 de la Resolución No. 70 del 4 de febrero de 2011.

[25] Artículo 33 de la Resolución No. 70 del 4 de febrero de 2011.

[26] Según la apoderada de las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras "los documentos aportados, sin afectar la capacidad demostrativa, que ese medio auténtico debería tener, resultando meros, el Estado está llamado a garantizar, **esa documentación pública, es la EXTERIORIZACIÓN, de las peticiones** Conforme lo expuesto se pregunta: **¿podrá endilgarse, alguna responsabilidad** [a los miembros de la comunidad indígena Kogui Malayo Arhuaco]



**POSEEDORES y DUEÑOS LEGÍTIMOS** de estos cuatro predios, ilegalmente vendidos, cuando la estuvo en manos del propio Estado, en cabeza de los FUNCIONARIOS PÚBLICOS de distinto orden, miembros] de la FAMILIA BRITO, quienes como terceros, en medio de esta situación, [han resul CERTIDUMBRE, resultando menoscabados sus legítimos derechos y consecuentemente, ALT] DESENVOLVIMIENTO DE LAS RELACIONES SOCIALES, cuando se les expone, en medio público, desatadas por causa de la disputa de predios, Dios no lo quiera, cuando se debe perman ocupados por parte de la FAMILIA BRITO, desde hace más de un siglo?".

[27] Resolución No. 2107 del 8 de noviembre de 2012 "Sobre la presencia o no de grupos étnicos en la actividades a realizarse". Esta resolución fue expedida como consecuencia de la solicitud presentada por Abundantia Business Center S.A. con el objeto de obtener certificación sobre la presencia o no de grupo Proyecto Portuario del Complejo Agropecuario, Industrial y Turístico Almirante José Prudencio Padilla REGISTRO Y SE IDENTIFICA, la presencia de la Línea Negra de los cuatro (4) pueblos indígenas (K KANKUAMO), de acuerdo con el territorio ancestral demarcado bajo las Resoluciones 000002 del 4 de expedidas por el Ministerio de Gobierno, hoy ministerio del Interior...".

[28] Resolución No. 307 del 3 de mayo de 2012 "Sobre la presencia o no de grupos étnicos en las zona realizarse". Esta resolución fue expedida como consecuencia de la solicitud presentada por el subdirector Corporación Autónoma de La Guajira con el objeto de obtener certificación sobre la presencia o no de del Proyecto PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LAS UNIDADES AMBIENTALES COSTERA VERTIENTE NORTE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y PLAN DE MANEJO DE LA ZONA.

[29] "Por medio del cual se resuelve una querrela policiva instaurada por Elis Cecilia Brito Caldera en Brito, Adalgisa Brito Solano y Mirta Caldera Contreras contra el Cabildo Indígena Kogui-Malayo Arhu

[30] "ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA".

[31] "Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia"

[32] "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".

[33] Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 2017.

[34] Corte Constitucional, Sentencia T-024 de 1994.

[35] Corte Constitucional, Sentencia C-241 de 2010.

[36] El fundamento de dicha atribución se encuentra en el artículo 116 Superior.

[37] El numeral 2 del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 establece que la jurisdicción de lo contencio decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales...".

[38] Corte Constitucional, Sentencia T-850 de 2012.

[39] Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 2002.

[40] Corte Constitucional, Sentencia SU-574 de 2019.

[41] Corte Constitucional, Sentencia SU-425 de 2016.

[42] Corte Constitucional, Sentencia T-493 de 2009.

[43] "Al respecto, en la Sentencia T-310 de 2009, se indicó que: (...) la acción de tutela contra sentencia de decisión judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela sea una instancia de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria. La acción de tutela no es un mecanismo legislativo que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en los que la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales."

[44] Corte Constitucional, Sentencia T-735 de 2014.

[45] Corte Constitucional, Sentencia T-049 de 2013.

[46] Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2014.

[47] Corte Constitucional, Sentencia T-049 de 2013.

[48] Op cit.

[49] Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 2007.

[50] Corte Constitucional, Sentencia T-684 de 2013.

[51] En el acta de la audiencia pública y diligencia de inspección ocular que se efectuó el 24 de marzo de 2014, el señor Leonardo Beltrán Ramírez (representante del cabildo indígena Kogui Malayo Arhuaco) manifestó que el ente para dirimir el conflicto.

[52] Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2019.

[53] "Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de 1998."

[54] "Cfr. sentencia T-442 de 1994."

[55] "Cfr. sentencia SU-1300 de 2001."

[56] "Cfr. sentencia T-442 de 1994."

[57] "Cfr. sentencia T-538 de 1994."

[58] "Sentencia SU-159 de 2002."

[59] Corte Constitucional, Sentencia SU-195 de 2012, reiterada en las sentencias SU-416 de 2015, T-5

[60] Corte Constitucional, Sentencia T-210 de 2019.

[61] Ibíd.

[62] Corte Constitucional, Sentencia SU-489 de 2016.

[63] Corte Constitucional, Sentencias T-314 de 2013 y T-214 de 2012.

- [64] Corte Constitucional, Sentencia T-590 del 2009, reiterada, en la sentencia T-247 de 2016, entre otros.
- [65] Corte Constitucional, Sentencia T-261 de 2013.
- [66] "Por el cual se dictan normas sobre Policía".
- [67] "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia".
- [68] El artículo 126 del Decreto Ley 1355 de 1970, textualmente consagraba: "En los procesos de policía de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo".
- [69] Corte Constitucional, Sentencias C-034 de 2019 y C-742 de 2006.
- [70] Corte Constitucional, Sentencia C-668 de 2005. Cfr. Sentencia C-111 de 2017.
- [71] Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 2020.
- [72] Corte Constitucional, Sentencia C-742 de 2006. "(...) dentro de la categoría de bienes que integrar existirá otra: la de los bienes de interés cultural, que surge en virtud de la declaración expresa del Ministerio de Cultura de los destinatarios de la Ley 397 de 1997 y de sus normas reglamentarias. Entonces, los bienes de interés cultural son el patrimonio cultural de la Nación, pero que, en consideración con la declaratoria gubernamental como tal, se clasifican en la cultura y en sus normas reglamentarias". En esta sentencia también se señaló que "el concepto de patrimonio cultural general y el de interés cultural es especial, de ahí que los bienes que hacen parte de la primera categoría son los que adquieren el carácter especial de interés cultural, dada su declaratoria, siempre hacen parte del patrimonio cultural".
- [73] Corte Constitucional, Sentencia C-082 de 2020.
- [74] Ley 397 de 1997, artículos 4º, 10º, 11, 14 y 19.
- [75] "Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución y la Ley 397 de 1997, en materia de patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan las funciones del Departamento Administrativo de la Cultura y del Patrimonio Cultural al Ministerio de la Cultura".
- [76] "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones".
- [77] Según la Resolución No. 2873 del 13 de noviembre de 2012.
- [78] "Por el cual se reglamenta parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1712 de 2014, en materia de Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material".
- [79] Cuad. 2, fls. 71 a 77.
- [80] Del escrito presentado el 6 de diciembre de 2016 en ejercicio del derecho de petición a la Alcaldía de Bogotá, por el representante de las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras y de la querrela policial del año 2015, se puede extraer que el 15 de julio de 2015 ocurrió que los hijos de Carmela Segunda Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras, adquirieron una vivienda ubicada en el predio El Prado para lo cual adquirieron una madera. Dicen que les fueron indicados por el representante y gestor local de Gonawindua Tayrona, Jesús María Tapias. Ante tal situación, decidieron acudir al municipio de Dibulla y en diligencia realizada en esa fecha, respecto del mencionado inmueble se presentaron diferentes versiones por parte de la familia Brito y del citado señor Tapias. || Para la representante de la familia Brito quedó claro que los predios de propiedad de la familia Brito fueron objeto de un presunto fraude en el que el Ministerio de Cultura y el Incoder en liquidación, pues existe un contrato de compraventa a favor de la familia Brito.

Lola, El Prado, La María y El Chocho y la firma de un convenio con la ONG Amazon Conservation Trust.

[81] Cuad. 2, fls. 154 y 155.

[82] Cuad. 2, fls. 163 a 165.

[83] Como querellados asistieron a la audiencia pública: Leonardo Beltrán Ramírez (representante del Cabildo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla), María Tapias, Ricardo Rey, Alejo Sauna Mamatacan, Arquímedes Arias Sarmiento (representantes del Arhuaco) y en calidad de querellantes: Mirta Felicia Contreras, Carmela Segunda Brito de Restrepo, A Pimienta Brito.

[84] Elis Cecilia Brito Caldera como representante legal de las familias Brito Caldera y Brito Solano se quejó por el hecho de que los predios El Prado, La María y El Chocho fueron adjudicados por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCOPI) en 1971, siendo de propiedad de Lorenza Helena Redondo, Lucas Manuel Brito Redondo, Carmela Segunda Brito Redondo. Destacó que están situados en una zona húmeda y que solo en la "parte de adelante" es La María Tapias de la comunidad indígena "dio cuenta" que encontraron tres viviendas, una fue destruida y las otras dos están en el presente que en estos predios no viven por temas de seguridad, pero destacó que en Dibulla se respetan los derechos y legítimos propietarios de estos. || Narró lo sucedido el 15 de julio de 2015 exponiendo que cuando se fue a la vivienda para Carmela Segunda, el señor Tapias les informó que la comunidad indígena había comprado el predio El Prado un certificado de matrícula inmobiliaria diferente del que ellos tenían, motivo por el cual se dio una distinción entre el predio comprado y en el que se pretendía construir. || Luego, hizo alusión a los documentos que cada uno de los predios y de otros, a saber: la resolución de adjudicación por parte del entonces Incoapi, la Resolución No. 2873 del 13 de noviembre de 1971 expedida por el entonces Ministerio de Cultura declaró los bienes de interés cultural; el Convenio de Asociación No. 2279 de 2009 expedido por el Ministerio, el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incode, el Plan de Desarrollo Team y la escritura pública de la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta y advirtió acerca de algunos hechos como por ejemplo, que El Chocho y El Prado están registrados como si se tratara de un mismo predio; que no está identificado en el catastro, sin embargo todos están incluidos en la negociación que se finiquitó en el año 2009 y la protocolización de unos actos que no era necesaria, pues se trata de unas propiedades de una categoría. Con todo, reclamó la posesión de los predios al reparar que Carmela Segunda, tiene su territorio, libertad y tradición. Adicionalmente, pidió que se trabara la litis para que cada uno pudiera alegar su derecho y finalmente, solicitó el statu quo. || Dada la palabra a Leonardo Beltrán Ramírez (representante del Cabildo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla) este insistió que la inspección central no es el ente para dirimir el conflicto. || En la terminación de la audiencia pública la Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla manifestó que debía cerrar el proceso y dar lugar a que realizara el trámite correspondiente.

[85] En la queja se solicitó que en caso de observarse "que hay actividad... en los predios de nuestra lista de 'invasores', prioritariamente se le NOTIFIQUE a la ESTACIÓN DE POLICÍA DE DIBULLA y posteriormente se le informe URGENTE". (Subrayado y mayúsculas dentro del texto original)." Cuad. 2, fls. 194 a 200.

[86] Según acta de la diligencia se consignó que terceros han cercado gran cantidad de terreno del municipio de Dibulla de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla dejó constancia que actualmente, específicamente, el artículo 81. || El señor Novalita aportó a la diligencia copia de la escritura pública No. 1000 de 2009 de la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta y la representante de las querellantes allegó carta general de Agustín Codazzi y el plano correspondiente al globo de terreno vendido al resguardo indígena que incluye La María y El Chocho, los cuales son motivo de disputa. || Enseguida, se dio por terminada la mencionada diligencia.

[87] Según acta del 30 de junio de 2017, la jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Nacional, Juan José Novalita -coordinador del territorio del Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhuaco- y representante de las señoras Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras se trasladaron a los predios de Chocho para terminar con la perturbación que terceros ajenos a la querrela policiva promovida están realizando. El procedimiento consistió en desmontar dos avisos que contenían la frase "propiedad privada" y derrumbarlos. Se dispuso que la siguiente diligencia consistiría en escuchar a Julio del Prado, Luis Alfonso del Prado, Jaime Mendoza y a todas esas partes que también vendieron porque faltan muchas personas, frente a lo dicho por los nombres de ellos son los relacionados, razón por la cual se encontraban en esa audiencia. Intervino el señor Arias que se está desgastando el aparato judicial, dado que cuando el resguardo solicitó protección para orientar a que se solucione un conflicto, aclarando la señora Brito Caldera que presentó la queja en aras de proteger a la comunidad cuando terceras personas colocaron avisos de propiedad privada sobre los predios en disputa, comparecencia para que demuestren si ellos son los dueños. || Se le concedió la palabra a José Mendoza y manifestó que su padre cuidó de las tierras de los Hoyos por más de cuarenta años. Explicó que él fue el que vendió las tierras a los aquí presentes. Especificó que cuando se habló de los cuatro predios se tenía claro dónde estaban y que cuando los indígenas le solicitaron que les diera el terreno que va "desde la boquita hasta la loma", él tenía un documento privado y ellos quitaron la cerca. Expresó que los señores Hoyos (quienes viven en el predio) su padre los represente. Dijo que no entiende cómo los indígenas vendieron esa parte donde se presentó la diligencia de fecha de 1978, luego, ahora es necesario determinar cuáles fueron las escrituras que presentaron para haber vendido "valla para allá" se les entregó a ellos, pero del aviso a La Boquita, no. Sostuvo que después se enteraron de esto sabiendo que no se había negociado. Comentó que más adelante tuvieron inconveniente con los señores Hoyos por el terreno. Esta situación hace parte de un nuevo caso, destacó. || En uso de la palabra, Julio del Prado manifestó que vendió a Jaime Gómez, quien se trasladó para Medellín y dejó el predio en manos de Roberto Murgas. Dijo que desde joven iba con su papá a esas tierras que es el predio de los Hoyos. Señaló que no entiende por qué José mencionó que no han tenido tierras ahí. Destacó que cuando estaba en conocimiento de estas y les dio un documento en el que aparecen Nicomedes, Manuel y Francisco del Valle, los indígenas. Aseveró que no han vendido predio de nadie y que después de que eran veinticinco hectáreas

[88] Cuad. 2, fls. 234 a 237.

[89] Asistieron a la audiencia pública: Elis Cecilia Brito Caldera (representante legal del conflicto de E. Brito de Restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras contra la comunidad indígena, proceso que se encuentra en trámite) y Sarmiento (representante del Cabildo Indígena Kogui Malayo Arhuaco). También comparecieron Jaime Gómez, Zarabata Coronado, José Shibulata Zarabata Sauna, Daniel Nacogui Garavito, Julio del Prado, Luis Alfonso del Prado, Brito Caldera y Estivinson Rafael del Prado.

[90] La jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibuja manifestó que en la mencionada oficina existe una querrela policiva promovida por Elis Cecilia Brito Caldera, restrepo, Brito Solano y Caldera Contreras contra la comunidad indígena, proceso que se encuentra en trámite y las partes del aludido trámite denunciaron que terceras personas colocaron avisos de propiedad privada sobre los predios en disputa el cual se procedió conforme al artículo 81 de la Ley 1801 de 2016. || Luego, habló Luis Alfonso del Prado y a todas esas partes que también vendieron porque faltan muchas personas, frente a lo dicho por los nombres de ellos son los relacionados, razón por la cual se encontraban en esa audiencia. Intervino el señor Arias que se está desgastando el aparato judicial, dado que cuando el resguardo solicitó protección para orientar a que se solucione un conflicto, aclarando la señora Brito Caldera que presentó la queja en aras de proteger a la comunidad cuando terceras personas colocaron avisos de propiedad privada sobre los predios en disputa, comparecencia para que demuestren si ellos son los dueños. || Se le concedió la palabra a José Mendoza y manifestó que su padre cuidó de las tierras de los Hoyos por más de cuarenta años. Explicó que él fue el que vendió las tierras a los aquí presentes. Especificó que cuando se habló de los cuatro predios se tenía claro dónde estaban y que cuando los indígenas le solicitaron que les diera el terreno que va "desde la boquita hasta la loma", él tenía un documento privado y ellos quitaron la cerca. Expresó que los señores Hoyos (quienes viven en el predio) su padre los represente. Dijo que no entiende cómo los indígenas vendieron esa parte donde se presentó la diligencia de fecha de 1978, luego, ahora es necesario determinar cuáles fueron las escrituras que presentaron para haber vendido "valla para allá" se les entregó a ellos, pero del aviso a La Boquita, no. Sostuvo que después se enteraron de esto sabiendo que no se había negociado. Comentó que más adelante tuvieron inconveniente con los señores Hoyos por el terreno. Esta situación hace parte de un nuevo caso, destacó. || En uso de la palabra, Julio del Prado manifestó que vendió a Jaime Gómez, quien se trasladó para Medellín y dejó el predio en manos de Roberto Murgas. Dijo que desde joven iba con su papá a esas tierras que es el predio de los Hoyos. Señaló que no entiende por qué José mencionó que no han tenido tierras ahí. Destacó que cuando estaba en conocimiento de estas y les dio un documento en el que aparecen Nicomedes, Manuel y Francisco del Valle, los indígenas. Aseveró que no han vendido predio de nadie y que después de que eran veinticinco hectáreas

pertenecientes a un tío y a su padre- y eso fue lo que negociaron. Destacó que tienen el testimonio de p tierras eran de ellos. Manifestó que no han vendido playa, frente a lo cual el señor Mendoza informó, q Alfonso del Prado y comunicó que el señor Chago sembró unas palmas de coco ahí, advirtiéndosele qu predios. || La jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibullá aportados a la diligencia dando a conocer las colindancias: al norte con el mar caribe; al sur con el prec al oriente con el caño de La Madre Vieja, concluyendo que no era posible venderle a la comunidad ind con el mar caribe. || Continuó, Luis Alfonso del Prado señalando que, según lo manifestado, ellos no te Mendoza aclaró que sí los tienen hacia el sur y no hacia la playa, al respecto contestó el señor del Prado que es de los mangles". Enseguida, la señora Brito Caldera le solicitó los documentos, respondiéndose indígena cuando hicieron el negocio. || La jefe de la mencionada oficina leyó el documento en el que se Amaya vendió el predio rural La Matua ubicado en la parte inferior de los límites del resguardo indígena de Dibulla con una extensión superficiaria de 9 hectáreas y 9.111 metros cuadrados, sin que se mencionara a Alfonso del Prado y destacó que esas tierras eran de su papá y de su tío y de los señores Segundo Sabas alambres para demarcar, dado que se decía que ellos no tenían tierras y como "viejito y Guillermo" se procedió a medir la tierra y a dividir por la mitad. Así fue que "la pegamos con la otra parte hacia el sur, la hermana Josefa tienen conocimiento de que esas tierras pertenecen a Nicomedes del Prado, Manuel de lo cual interfirió Jaime Mendoza destacando que no "salía a la playa". || Prosiguió la mencionada función consignaron en el documento, a saber: al norte con el mar caribe en una extensión superficiaria de 440 metros; al sur con Rosa Sabas Bermúdez con una extensión superficiaria de 435 metros; al este con Rosa Sabas Bermúdez con una extensión superficiaria de 79 centímetros y al oeste con Horacio Hoyos con una extensión superficiaria de 241 metros y 40 centímetros. Luis Alfonso del Prado manifestando que en los años ochenta hubo un mar de leva que hizo desaparecer al señor Sabas, por ello, toda la tierra que hay del "pantano para allá es playa, es pura arena de mar", concluyendo que habló nuevamente del derecho que tiene su papá, pues cuidó el predio del señor Hoyos por más de 40 años. Destacó que los predios a los indígenas, es muy diferente al terreno que se mencionó.

[91] Cuad. 2, fl. 209.

[92] Los artículos 1 y 2 de la mencionada decisión fueron modificados por la Resolución No. 029 del 1 de agosto de 2017, en estos términos: "ARTÍCULO PRIMERO: AMPARAR la posesión en lo concerniente al predio denominado 'EL CHOCHO', identificado como aparece en los descripciones por los detalles descritos en esta resolución". Cuad. 2, fl. 282.

[93] "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN 019 DEL 2017 EMITIDO POR LA JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA", proferida por la Jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Dibulla en la que resolvió: (i) no revocar la Resolución No. 019 del 2017 y 2 de la mencionada decisión que para todos los efectos quedará así: "ARTÍCULO PRIMERO: AMPARAR la posesión en lo concerniente al predio denominado 'EL CHOCHO', identificado como aparece en los descripciones por los detalles descritos en esta resolución".

[94] "POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN Y SE CONFIRMA la decisión emitida por el Alcalde Municipal de Dibulla -La Guajira en la que se decidió: (i) resolver el recurso de apelación y (ii) confirmar en todas sus partes la Resolución 019 del 01 de agosto de 2017 y (iii) rechazar por extemporáneo el recurso de apelación". Cuad. 2, fl. 282.

Cabildo Gobernador Kogui Malayo Arhuaco.

[95] "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 176 EM MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA", dictada por el Alcalde Municipal de Dibulla -La Guajira artículo segundo de la Resolución No. 176 de 2018, que para todos sus efectos legales quedará así: "Al los artículos 1 y 2 de la Resolución 019 del 2017 que para todos sus efectos legales quedarán así: ART. amparo policivo sobre los predios "LA LOLA", "EL PRADO" Y "LA MARÍA", por las razones expue providencia. ARTÍCULO SEGUNDO: No amparar la posesión en lo concerniente al predio denominac aparece en los títulos primitivos por los detalles descritos en esta resolución".

[96] De acuerdo con la Sentencia T-210 de 2019 el defecto fáctico en su dimensión positiva se configu valoran pruebas que son inconducentes al caso concreto.

[97] El artículo 126 del Decreto Ley 1355 de 1970, textualmente consagraba: "En los procesos de polic dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo".

[98] En el acápite 6 de esta providencia se señaló que las pretensiones del querellante prosperan si este inmueble, existan actos o hechos perturbatorios que impiden el goce pleno de la cosa, que tales hechos respaldados por ninguna ley dado que deben ser el resultado del actuar del querellado (vías de hecho), hechos y la parte querellada. Respecto de la posesión de la comunidad indígena accionante en la Resol 2017 textualmente se lee: "**El RESGUARDO KOGUI MALAYO ARHUACO**, se encuentra asentad 'LA LOLA', es decir, el Resguardo Indígena, ejerce posesión en el con ánimo de señor y dueño...". Pos El Chocho.



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Ministerio de Cultura

n.d.

Última actualización: 1 de septiembre de 2022

